

La **contradicción** del **cuidado:**

EL FMI, GÉNERO Y AUSTRERIDAD



**If WOMEN
stop,
the WORLD
stops.**

**WILL NOT
SOME**

**WOMEN'S
GLOBAL
STRIKE**

CRÉDITO: ROOS SALBRINK

AGRADECIMIENTOS

Este informe ha sido compilado y redactado por Roos Saalbrink con la edición, el apoyo y la orientación de David Archer, Ambos de ActionAid International. Se recibieron importantes aportes a los borradores por parte de Emma Burgisser de Christian Aid; Friederike Strub del Proyecto Bretton Woods; Diane Elson, Profesora Emérita de la Universidad de Essex y ex miembro del Comité de las Naciones Unidas para Políticas de Desarrollo; Constanza Pauchulo, Directora de Programas, International Women's Rights Action Watch Asia Pacífico; Sakshi Rai, Nabil Abdo, Oxfam International; Verónica Montufar, Public Services International; Huma Haq, Public Services International; Caroline Othim, Alianza Global para la Justicia Fiscal; Âurea Mouzinho, Alianza Global para la Justicia Fiscal; Sophie Efange, Gender and Development Network RU; Nikola Wachter, Education International; Bhumika Muchhala, Red del Tercer Mundo; Andrea Guillem e Isabel Ortiz, Justicia Social Global.

Se recibieron importantes aportes a los borradores por parte de: Rachel Noble, ActionAid RU; Wangari Kinoti, Jess Midwinter y Samantha Bandak de ActionAid International; Chikumbutso Ngosi, ActionAid Malawi; Margaret Brew-Ward, ActionAid Ghana; Sharaf Nawar Brishti y Mohammad Maruf Hosain, ActionAid Bangladesh; Foday Bassie Swaray, Director Ejecutivo de ActionAid Sierra Leona; Chelcy Alma Heroe, Directora Ejecutiva y cofundadora, Informal Workers Organisation (IWO) Sierra Leona; Aminata K. Lamin, ActionAid Sierra Leona; Chu Thị HÀ, ActionAid Vietnam y Karol Balfe, ActionAid Irlanda, así como otros colegas de ActionAid International.

PARA CITAR ESTE INFORME: ActionAid International (2022), The Care Contradiction: The IMF, Gender and Austerity

DISEÑO: www.nickpursersdesign.com

FOTO DE PORTADA: Las enfermeras soportan múltiples cargas asistenciales: Enfermera en el centro de salud de Agba Amaeta, Nigeria.
FOTO: ACTIONAID

CONTENIDO

Resumen ejecutivo	4
1. INTRODUCCIÓN	6
2. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA ASISTENCIA	9
3. EL IMPACTO DE GÉNERO DEL ASESORAMIENTO DEL FMI SOBRE CRECIMIENTO ECONÓMICO, DEUDA Y AUSTERIDAD	12
4. REPERCUSIONES DE GÉNERO DEL ASESORAMIENTO DE AUSTERIDAD DEL FMI SOBRE LAS LIMITACIONES DEL COSTO SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO	19
5. LA ESTRATEGIA DE GÉNERO DEL FMI: ALGUNAS REFLEXIONES	30
6. UNA ALTERNATIVA MÁS AUDAZ: RECOMENDACIONES PARA UNA TRANSICIÓN FEMINISTA JUSTA	36
Referencias	43

LISTA DE RECUADROS

1.1: GHANA: EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS MUJERES JÓVENES	7
1.2: DEFINICIÓN DE ASISTENCIA	9
2.1: SIERRA LEONA: ORGANIZARSE PARA CAMBIAR LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS	11
3.1: COUNTING TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO	14
3.2: ¿QUÉ ES AUSTERIDAD?	15
3.3: ZAMBIA: GENIO Y FIGURA...	16
4.1: NEPAL: LOS RECORTES SALARIALES EN EL SECTOR PÚBLICO PERJUDICAN LA EDUCACIÓN Y A SUS TRABAJADORES	21
4.2: BANGLADESH: THE IMPACT OF COVID ON WOMEN'S PAID AND UNPAID WORK	22
4.3: LAS ENFERMERAS SE QUEDAN SIN TRABAJO POR LOS RECORTES SALARIALES DEL SECTOR PÚBLICO	22
4.4: TESTIMONIO DESDE LA PRIMERA LÍNEA EN NEPAL: SUMAN GIRI SHRESTHA, JEFA DE ENFERMERÍA	25
4.5: EFECTOS DE LOS RECORTES DEL GASTO EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS SANITARIOS EN NIGERIA Y AL AGUA EN GHANA	26
4.6: SIERRA LEONA: LOS RECORTES SALARIALES EN EL SECTOR PÚBLICO LIMITAN LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS	27
4.7: VIETNAM: PRUEBAS CONTUNDENTES DE LOS DIARIOS DE USO DEL TIEMPO	28
4.8: OBSERVACIONES DEL EXPERTO INDEPENDIENTE DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA DEUDA	28
4.9: PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS	29
5.1: VISIÓN Y ESTRATEGIA CENTRALES DE LA ESTRATEGIA DE GÉNERO DEL FMI	31
6.1: EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL IMPACTO DE LAS RESTRICCIONES SALARIALES DEL SECTOR PÚBLICO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS	39
6.2: OTROS RECURSOS	42



Duplicar el trabajo: trabajo remunerado y no remunerado en Ruanda
CRÉDITO: ACTIONAID

RESUMEN EJECUTIVO

Las mujeres, que realizan la inmensa mayoría tanto del trabajo doméstico no remunerado como del trabajo de cuidados mal remunerado en los servicios públicos, se llevan la peor parte de las medidas de austeridad¹, especialmente de los recortes en la financiación del sector público. Cuando los servicios públicos están infrafinanciados se produce una triple desventaja para las mujeres, que desproporcionadamente pierden el acceso a los servicios, pierden oportunidades de trabajo decente y asumen la creciente carga del trabajo de cuidados no remunerado.

El mundo se enfrenta a múltiples crisis -desigualdad, clima, salud, educación, conflictos y deuda- que se han visto exacerbadas por el COVID-19. Aunque se considera que el neoliberalismo es una de las causas profundas de estas crisis convergentes,² es la misma visión neoliberal del mundo la que está dando forma a la respuesta, en particular desde el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI es el organismo más importante de la arquitectura financiera internacional³ y el principal defensor de las políticas de austeridad que se han impuesto en todo el mundo durante cuatro décadas y que se están intensificando tras la crisis COVID con recortes masivos del gasto público.⁴ El efecto es trasladar los costos de estas múltiples crisis a los que menos pueden pagar. Las mujeres, en particular, son quienes han absorbido el golpe de la austeridad y las crisis.

Las feministas llevan mucho tiempo instando al FMI y al Banco Mundial a “crear una arquitectura financiera transparente, responsable y con igualdad de género”,⁵ criticando el actual sistema económico neoliberal por patriarcal y neocolonial, que sirve tanto para explotar como para exacerbar la posición relativa de subordinación económica, social y política de las mujeres. En este contexto, ¿qué podemos pensar de la nueva estrategia de integración de la perspectiva de género del FMI?⁶

En este nuevo informe, ofrecemos un resumen de los últimos datos sobre el impacto de género del asesoramiento político del FMI sobre la austeridad en general, y sobre las limitaciones de la masa salarial del sector público en particular. A la luz de estos datos, revisamos la nueva Estrategia de Género del FMI, destacando las áreas clave en las que se queda corta. A continuación, ofrecemos una visión de una agenda más transformadora sobre la asistencia que debería guiar al FMI y a otros organismos comprometidos con la acción contra la injusticia de género.

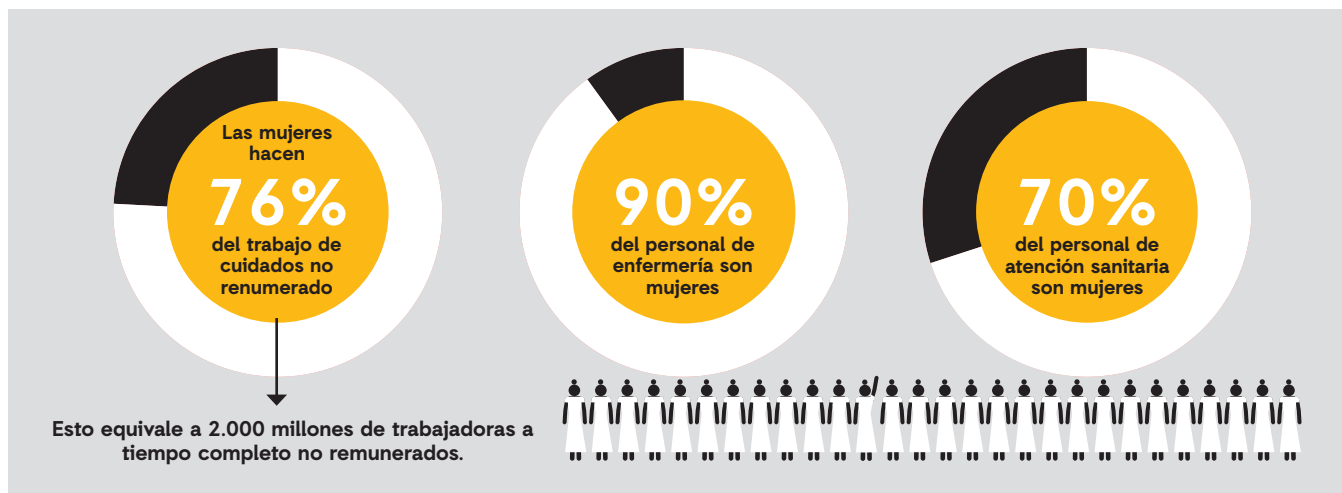
La Estrategia de Género del FMI se queda corta en muchos aspectos:

- Habla de “brechas de género” pero no de igualdad de género sustantiva.
- No reconoce el impacto del recorte del gasto público en el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres y en las oportunidades de las mujeres para conseguir un trabajo decente.
- Reconoce su propia falta de experiencia en cuestiones de género, pero no se compromete a trabajar con movimientos de mujeres y economistas feministas que podrían ayudar a llenar la brecha.
- Evita el uso en la práctica de evaluaciones de impacto basadas en el género.
- Ignora el impacto de sus propias políticas y prácticas básicas de austeridad en el menoscabo de los derechos de las mujeres, negando su propio poder e impacto.
- Habla de datos desglosados, pero no habla de un enfoque interseccional sistemático de la recolección y el análisis de datos.
- Se centra en medidas paliativas y programas compensatorios, como la protección social específica para algunas mujeres (que tienen un mal historial),⁷ dejando el sistema básico sin cambios.
- Propone una condicionalidad de género que ignora la naturaleza inherentemente problemática y neocolonial de cualquier condicionalidad del FMI.

Basándonos en este análisis, hemos sumado nuestra voz a la de los movimientos feministas y las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer que han escrito al Director Gerente del FMI para que rechace su actual estrategia de género. El cambio transformador en materia de género requiere un alejamiento definitivo del culto a la austeridad. No basta con que el FMI o los ministerios de finanzas adopten algunas medidas compensatorias para corregir los resultados injustos que se derivan de sus propias intervenciones básicas, y no basta con implicar a las mujeres de forma más sistemática en el sistema económico existente, que en sí mismo es injusto.

Necesitamos una visión más amplia de una alternativa feminista y justa y una agenda que construya economías y sociedades basadas en el cuidado tanto de las personas como del planeta. Esto significa ir más allá del crecimiento del producto interior bruto (PIB) para situar los derechos humanos, la justicia climática y el cuidado en el centro de los objetivos e indicadores económicos. Necesitamos un enfoque feminista de la justicia fiscal y tributaria, y necesitamos el pleno reconocimiento de los vínculos entre el trabajo de cuidados no remunerado y la financiación de los servicios públicos. Fundamentalmente, necesitamos nuevas instituciones internacionales que puedan dar forma y enmarcar una economía mundial más justa.

Es posible que el FMI nunca sea capaz de impulsar una agenda transformadora de este tipo, porque entraría en contradicción con los propios fundamentos y estructuras de poder de la institución. Quienes están verdaderamente comprometidos con la integración de la perspectiva de género deberían comprometerse de forma más sistemática con el pensamiento heterodoxo y los economistas feministas, situando los cuidados en el centro, y haciendo más por lidiar honestamente con las contradicciones entre austeridad y cuidados. Como mínimo, el FMI y los ministerios de finanzas deberían comprometerse a garantizar que no perjudican a las mujeres ni socavan la igualdad de género con ninguna de sus intervenciones.





Mujeres en Bangladés desarrollando su propia estrategia de género.
CRÉDITO: ACTIONAID

1. INTRODUCCIÓN

Después de tres años de pandemia mundial, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento claro y urgente en el foro anual de alto nivel 2022 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

*“De cara al futuro, necesitamos un nuevo acuerdo mundial para que los países en desarrollo tengan una oportunidad justa de construir su propio futuro (...). El sistema financiero mundial está fallando al mundo en desarrollo. Aunque, puesto que no se diseñó para proteger a los países en desarrollo, quizá sea más exacto decir: el sistema está funcionando como se pretendía. Por eso necesitamos una reforma. Necesitamos un sistema que funcione para los vulnerables, no solo para los poderosos”.*⁹

El mundo se enfrenta a múltiples -desigualdad, clima, salud, educación, conflictos y deuda- que se han visto exacerbadas por el COVID-19 (véase el recuadro). Una de las causas principales de estas crisis convergentes es la *“lógica neoliberal subyacente de búsqueda agresiva de beneficios que pone las necesidades humanas y sociales al servicio de los beneficios del capital”*.⁹ El sistema económico globalizado crea una crisis tras otra y sigue *“organizado con la codicia y la búsqueda de beneficios en su núcleo”*, mientras se invisibiliza el trabajo de cuidados no remunerado y se ignoran los límites de los recursos del planeta.¹⁰ Las instituciones financieras internacionales -y los países ricos que constituyen sus accionistas dominantes- no han respondido adecuadamente a estas crisis. La suspensión de la deuda ha sido demasiado limitada en cuanto a su alcance y calendario,¹¹ el “acuerdo de los ricos” en materia de impuesto de sociedades liderado por la OCDE solo beneficia a las grandes economías,¹² y otras intervenciones, como la se basaron en asignaciones sesgadas e injustas en favor de los países ricos.¹³ Solo una pequeña parte de los recursos de respuesta relacionados con el COVID se destinó a los países más necesitados.

La pandemia de COVID-19 exacerbó estas crisis que se solapan actualmente, socavando aún más la igualdad de género, aumentando de manera desproporcionada el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres y provocando un aumento de la violencia de género y pérdidas tanto de medios de vida en la economía informal como de puestos de trabajo en el sector público (donde las mujeres suelen desempeñar las funciones peor pagadas con condiciones inseguras y precarias). La *evaluación rápida realizada por ActionAid de las repercusiones de la pandemia de Covid en las mujeres jóvenes de 14 zonas urbanas de India, Ghana, Kenia y Sudáfrica*, reveló que el 71% de las mujeres declararon un aumento de sus tareas domésticas durante el período de cuarentena, el 65% declararon que el costo de los alimentos y otros bienes de consumo aumentó durante la cuarentena, mientras que el 35% no pudieron seguir realizando su trabajo remunerado habitual, lo que significa que sus ingresos se redujeron o desaparecieron por completo.¹⁴

1.1: GHANA: IMPACTO DE COVID-19 EN LAS MUJERES JÓVENES

Akurugo Mavis Apaasimen es una joven de 21 años de Dapoore (Ghana), estudiante y miembro del movimiento de mujeres jóvenes urbanas. Al preguntarle por la repercusión del COVID, observa lo siguiente: *“Nuestras escuelas han recurrido al uso de Internet como nueva norma para estudiar, ya que no podemos hacerlo cara a cara. Debido a la mala conexión a Internet, no puedo acceder a Internet para mis estudios en línea. Con el cierre de escuelas, ha aumentado el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, por ejemplo, ir a buscar agua, cocinar y cuidar de los hermanos pequeños. Pensaba que la cuarentena y la permanencia en casa me darían la oportunidad de descansar, pero no me imaginaba la cantidad de tareas domésticas que se avecinaban”.*

Source: ActionAid Ghana, Proyecto Young Urban Women

El FMI desempeña “un papel central dentro de la arquitectura financiera internacional”,¹⁵ estableciendo la política macroeconómica y las cuestiones del sector financiero a nivel mundial.¹⁶ Es el principal defensor de las políticas de austeridad que se siguen imponiendo en todo el mundo, y que se están intensificando después de la crisis económica y financiera, dando lugar a recortes masivos en el gasto público.¹⁷ Los economistas neoliberales del FMI y muchos ministerios de finanzas sugieren que estos recortes del presupuesto público son necesarias para que la deuda sea sostenible. Pero al deprimir la actividad económica, a menudo hacen que la deuda sea menos sostenible, con lo cual crean un círculo vicioso que socava la capacidad de los Estados para responder a las crisis, deslegitimando “los argumentos a favor del gasto público, enmarcando las políticas que mejoran las condiciones de la gente común y corriente por ser poco realistas y despilfarradoras”.¹⁸ El efecto es trasladar los costos de estas múltiples crisis a los que menos pueden pagar.

Las mujeres son las más afectadas pues, literalmente, son, quienes absorben el golpe de la austeridad y las crisis, ocultando ante la opinión pública el costo humano total.¹⁹ El trabajo y la contribución de las mujeres se ocultan de manera activa.²⁰ Se estima que las mujeres y las niñas realizan el 76 por ciento del trabajo doméstico y de cuidados en todo el mundo.²¹ Es más, esta cifra aumenta significativamente cuando los servicios públicos no reciben fondos suficientes. Las mujeres y las niñas son también las primeras en perder el acceso cuando se recortan los servicios públicos o se cobran tasas, y las primeras en perder sus empleos y oportunidades de un trabajo decente, ya que tienen más probabilidades de trabajar con contratos de corta duración en funciones de primera línea en el sector público (por ejemplo, 90 por ciento del personal de enfermería son mujeres).²² El impacto acumulativo de las medidas de austeridad sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género es esencialmente devastador.²³

Las feministas llevan mucho tiempo instando al FMI y al Banco Mundial a “crear una arquitectura financiera transparente, responsable y con igualdad de género”,²⁴ criticando el actual sistema económico neoliberal al calificarlo de patriarcal y neocolonial, pues sirve tanto para explotar como para exacerbar la posición relativa de subordinación económica, social y política de las mujeres. Las estructuras y sistemas de extracción y explotación de mano de obra, vidas humanas y recursos naturales, del Sur al Norte global, se establecieron durante la época colonial y continúan hasta nuestros días, con los países del Norte global dominando el poder de decisión del FMI y otras instituciones financieras internacionales.²⁵

En este contexto, ¿qué podemos pensar de la nueva estrategia de integración de la perspectiva de género del FMI?²⁶ ¿Es acaso una respuesta eficaz a décadas de defensa de los derechos de la mujer por parte de las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y las organizaciones de la sociedad civil (OSC)? ¿Conducirá a una transformación de las políticas básicas del FMI o se limitará a retocar los impactos negativos de género de esas políticas? En resumen, ¿tendrá la estrategia de género la fuerza y el alcance necesarios para impedir que el FMI siga aplicando las políticas de austeridad que sabemos que tienen un impacto negativo en materia de género?

Existen alternativas claras que podrían y deberían buscar el FMI y los gobiernos nacionales. Es necesario reequilibrar la proporción global de la renta que se destina a la mano de obra (en comparación con la propiedad del capital), que ha disminuido drásticamente desde los años setenta.²⁷ Las feministas, las organizaciones por los derechos de las mujeres, los sindicatos y los movimientos por la justicia social han planteado la necesidad de situar las inversiones públicas en infraestructuras sociales y trabajadores de primera línea del sector público en el centro de la recuperación posterior al COVID y de las respuestas transformadoras necesarias para revertir la crisis climática, con el fin de garantizar un futuro más solidario, feminista y justo.²⁸

Este informe pretende reunir las enseñanzas extraídas del trabajo sobre los servicios públicos sensibles al género y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres, con la investigación sobre los impactos distributivos de las políticas aconsejadas por el FMI, especialmente la consolidación fiscal y los recortes de la masa salarial del sector público.

- En la siguiente sección ofrecemos algunas definiciones de cuidados y otros conceptos clave. En la tercera sección ofrecemos un resumen de los datos más recientes sobre el impacto de género del asesoramiento político del FMI.
- En la cuarta sección examinamos en detalle el impacto de las limitaciones de la masa salarial del sector público sobre las mujeres y las niñas.
- A continuación, en la quinta sección, examinamos la nueva estrategia de género del FMI, esbozando lo que dice, cómo podría utilizarse (en algunos casos como un primer paso), pero también las diversas formas en que se queda corta para el cambio sistémico más amplio que se necesita.
- La sección final ofrece una visión positiva de las políticas alternativas que los Estados y el FMI deberían seguir si realmente quieren tener un impacto transformador en materia de género, y concluimos con algunas recomendaciones clave para el futuro.



Desde la pandemia del Covid, profesores como Aida Lukman, en Indonesia, han tenido que asumir responsabilidades adicionales para atender a sus alumnos.
CRÉDITO: ACTIONAID

2. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS

1.2: DEFINICIÓN DE CUIDADOS

El **concepto de Cuidados** comprende todas las actividades y relaciones necesarias para la existencia y el bienestar de las sociedades, y de las personas dentro de esas sociedades. Esto incluye todas las actividades remuneradas y no remuneradas que permiten satisfacer las necesidades de todas las personas y reproducir la mano de obra para el mercado laboral. Los sistemas de cuidados incluyen la asistencia sanitaria, educación, el trabajo doméstico y la asistencia social.²⁹ Como parte de un cambio que se aleje de la economía actual, esto también implicaría cuidar del planeta para evitar desastres medioambientales y climáticos, y entablar relaciones sociales basadas en la reciprocidad, la cooperación y la mutualidad.

El **trabajo doméstico y de cuidados no remunerado** puede incluir actividades como la preparación de comidas, la limpieza del hogar, el lavado de la ropa, la recogida de agua y leña y el cuidado de niños, enfermos y ancianos.³⁰

Por **pobreza de tiempo** se entiende la falta de tiempo discrecional disponible para dedicarse a actividades en pro del bienestar social tras participar en el trabajo no remunerado y remunerado y en actividades necesarias. Cuando *“los ingresos del hogar disminuyen, la magnitud del trabajo no remunerado aumenta bruscamente, convirtiéndose en una ‘doble carga’ de trabajo remunerado y no remunerado”*.³¹ En consecuencia, si la paga del trabajo remunerado es baja, además de la pérdida de tiempo libre, la pobreza de tiempo “se suma a la privación material del hogar debido a la pérdida de consumo que habría permitido el trabajo no remunerado para el que no hay tiempo”.³² Esto pone de relieve *“el papel macroeconómico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en el sentido de que subvenciona de manera efectiva no solo la economía de mercado valorada y medida, sino también el suministro por parte del Estado de bienes y, especialmente, servicios a través de los cuales deberían cumplirse los derechos sociales y económicos”*.³³

La **reproducción social** comprende el conjunto de *“actividades e instituciones necesarias para crear vida, mantenerla y reemplazarla generacionalmente”*.³⁴ Esto incluye el trabajo de cuidados, definido como una *“economía sin mercado de aprovisionamiento social, que presta servicios directamente relacionados con la reproducción diaria e intergeneracional de las personas como seres humanos, especialmente a través de su cuidado, socialización y educación”*.³⁵ Las normas de género patriarcales rigen la autonomía y los cuerpos de las mujeres desde el hogar hasta la economía, conforman y refuerzan las *“desigualdades relacionales que estructuran la reproducción social y la división sexual del trabajo”*.³⁶

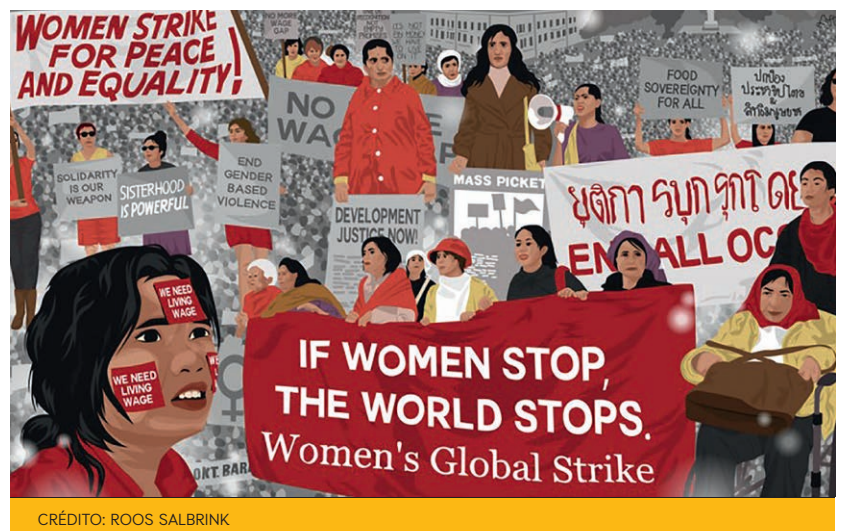
- **Reconocer** el valor social y económico del trabajo de cuidados (remunerado o no) y el derecho humano a los cuidados.
- **Recompensar, remunerar y representar** el trabajo de cuidados y a los cuidadores con un trabajo profesionalizado, igual salario por trabajo de igual valor, pensiones adecuadas, protección social integral, condiciones de trabajo saludables y seguras, representación fuerte, sindicalización y negociación colectiva y diálogo social en línea con el Programa de Trabajo Decente de la OIT.
- **Reducir** la carga del trabajo de cuidados no remunerado que recae sobre las mujeres.
- **Redistribuir** el trabajo de cuidados dentro de los hogares, entre todos los trabajadores, eliminando la división sexual del trabajo, y entre los hogares y el Estado.
- **Reivindicar** el carácter público de los servicios de cuidados y restablecer el deber y la responsabilidad primordial del Estado de prestar servicios públicos de cuidados y desarrollar sistemas de cuidados que transformen las relaciones de género y la vida de las mujeres, incluso financiando la capacidad de inversión de los Estados mediante una tributación justa y progresiva y garantizando la igualdad internacional de derechos fiscales de los Estados nación.

Una definición básica de servicios públicos incluye todos los servicios esenciales, como la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento, y la electricidad, prestados por un gobierno a todas las personas que se encuentran dentro de su jurisdicción. Los servicios públicos son esenciales para la realización progresiva de los derechos humanos y la corrección de las desigualdades de género y otras desigualdades interrelacionadas. Para ser eficaces, los servicios públicos también deben ser sensibles al género, financiados públicamente, prestados públicamente y universales, equitativos en materia de género e inclusivos (véase el [Marco de Servicios Públicos Sensibles al Género](#) de ActionAid y también un nuevo manifiesto colectivo sobre servicios públicos [Manifiesto global por los servicios públicos - El futuro es público](#)).

Para las mujeres y las niñas de países con infraestructuras y servicios públicos insuficientes, por ejemplo, donde el acceso al agua corriente o a servicios asequibles de cuidado de niños o ancianos es limitado o inexistente, dedicarse desde una edad temprana al **trabajo doméstico y de cuidados no remunerado puede suponer una importante merma de su tiempo**, su energía física y mental y sus oportunidades laborales y vitales. Como observó el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza *“Las cargas pesadas y desiguales del trabajo de cuidados no remunerado han sido reconocidas como obstáculos importantes para que las mujeres [y las niñas] disfruten de sus derechos humanos, incluidos sus derechos a la participación política, la salud, el trabajo y la educación”*.³⁷ Los países en los que las disparidades de género en el trabajo de cuidados no remunerado son mayores son los que tienen más probabilidades de carecer de una infraestructura de cuidados adecuada, incluidos el cuidado infantil y la atención y el apoyo a largo plazo.³⁸ Un informe de ActionAid de 2017 constató que: *“La jornada laboral habitual de una mujer rural africana dura hasta 16 horas, o incluso más en algunos casos, en las que realizan muchas tareas (a menudo simultáneamente). Las mujeres suelen trabajar 12 horas más a la semana que los hombres*.

En Ghana, la investigación de ActionAid reveló que las mujeres rurales dedican al menos seis horas al día al trabajo de cuidados no remunerado, casi diez veces más que los hombres. En Ruanda, las mujeres rurales suelen dedicar al menos cinco horas al día al trabajo de cuidados no remunerado, mientras que los hombres solo dedican 1,5 horas”.³⁹

Existe una clara dimensión global en la prestación de cuidados y en la falta de una oferta pública de calidad que tenga en cuenta las cuestiones de género. Como afirma el Manifiesto sobre los cuidados: Reconstruir la organización social de los cuidados: the current social organisation of care considers how care needs are met, “the interrelation of unpaid care work, (under) paid care work, public provisioning, private provisioning and community-based care arrangements.” la actual organización social de los cuidados considera cómo se satisfacen las necesidades de cuidados, “la interrelación del trabajo de cuidados no remunerado, el trabajo de cuidados (infra) remunerado, la provisión pública, la provisión privada y los acuerdos de cuidados basados en la comunidad”. La realidad actual “es fundamentalmente desequilibrada, desigual y, en última instancia, insostenible”. **La cadena global del cuidado significa que la infra inversión en los países más ricos extrae trabajadores del Sur Global para llenar los vacíos**. “En casa y dentro de las comunidades, a través de las cadenas globales de cuidados donde las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres negras y morenas del Sur global cubren el vacío de cuidados mientras están mal pagadas y en condiciones laborales precarias a través de los servicios, tanto públicos como privados. Esta injusticia se duplica y triplica en el caso de las mujeres que sufren múltiples e interrelacionadas formas de discriminación debido a su clase, raza, orientación/identificación sexual, discapacidad, edad o estatus migratorio, entre otras dimensiones”.⁴⁰



2.1: SIERRA LEONA: ORGANIZARSE PARA CAMBIAR LA SITUACIÓN DE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS

La señora **Fatmata Jabaty** tiene 49 años y es trabajadora doméstica de Freetown (Sierra Leona). Lleva muchos años realizando trabajos de cuidados mal remunerados, desde la muerte de su marido, cuidando de las casas de otras personas, cocinando comida para sus familias y cuidando de sus hijos. Su vida laboral se transformó cuando se puso en contacto con la Organización de Trabajadores Informales (IWO) en 2019.

“Me despidieron de un trabajo sin previo aviso ni motivo válido porque asistí al entierro de mi madre. Casi todos los empleadores para los que he trabajado en los últimos diez años me han sobrecargado de trabajo de la mañana a la noche, sin horario ni retraso en el pago del salario. Desde que empecé a trabajar con la IWO y sus socios en 2019, he ganado mucho. En 2019, por ejemplo, IWO me formó sobre las leyes laborales y mis derechos y responsabilidades como trabajadora doméstica, lo que me ha ayudado a relacionarme adecuadamente con mis empleadores. IWO y sus socios han reforzado mi capacidad formándome en protección infantil, gestión de grupos, tareas domésticas generales y el uso y manejo adecuados del equipamiento doméstico moderno.”

Cuando Fatmata empezó a trabajar, cobraba una cantidad mínima de 70.000 leones, pero desde que se conectó con IWO en los últimos cuatro años, se ha multiplicado por diez, hasta 700.000, porque ahora puede sentarse a negociar con sus empleadores las condiciones de su empleo. Pero sigue enfrentando desafíos: *“Ahora me preocupa mi jubilación sin régimen de Seguridad Social ni prestaciones”.*

Fuente: ActionAid Sierra Leona y Organización de Trabajadores Informales (IWO) en Sierra Leona

Demasiadas profesoras están mal pagadas y sobrecargadas de trabajo.
Naima Afoyorwoth en Uganda.
CRÉDITO: ACTIONAID





Dulali Begum, de Bangladesh, desempeña múltiples funciones remuneradas y no remuneradas, como la cría de aves de corral, la administración de una tienda de té, la costura y el cuidado de su familia.
CRÉDITO: ACTIONAID

3. EL IMPACTO DE GÉNERO DEL ASESORAMIENTO DEL FMI SOBRE CRECIMIENTO ECONÓMICO, DEUDA Y AUSTRERIDAD

Presentación del FMI

El FMI lleva a cabo una vigilancia económica rutinaria de casi todos los países a través de sus consultas del Artículo IV, ofreciendo a menudo asesoramiento político que puede ser ignorado por los países más ricos, pero que es bastante coercitivo en la dirección política de los países de renta más baja. Cuando los países se encuentran en crisis de deuda y necesitan préstamos de rescate del FMI (el prestamista de última instancia), el FMI ofrece asesoramiento y condiciones políticas aún más coercitivas. La forma del asesoramiento del FMI ha permanecido fundamentalmente inalterada durante los últimos cuarenta años, desde la introducción de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), aunque el asesoramiento se empaqueta, etiqueta y comercializa de nuevas maneras.

El modelo dominante del FMI se ha basado durante décadas en la ideología del neoliberalismo, que propugna una serie de políticas, como la austeridad, la liberalización, la desregulación de los controles de capital y de cambio, la privatización de los servicios públicos y de las empresas públicas, la reducción de los tipos impositivos directos con una dependencia simultánea de los impuestos indiscriminados sobre el consumo en nombre del “desarrollo” económico. El FMI concibe el “desarrollo” en sentido estricto como crecimiento económico, a pesar de que estas políticas se cuestionan constantemente por socavar los derechos humanos y los medios de subsistencia, y también por no alcanzar habitualmente las tasas de crecimiento más elevadas que se prometen. Los casos de grandes éxitos del crecimiento económico han tendido a no aplicar estas políticas.

Los problemas del crecimiento del PIB

El modelo de desarrollo extractivo neoliberal considera que el crecimiento económico (medido en producto interior bruto, o PIB) es tanto el medio como el objetivo último del desarrollo, y beneficia a quienes poseen riqueza, recursos y capital. En el FMI, y en la mayoría de los ministerios de finanzas que han interiorizado la misma ideología, persiste el enfoque en el crecimiento del PIB, a pesar de la evidencia de que el crecimiento por sí solo no conduce necesariamente a la justicia social para todos. De hecho, la búsqueda de un crecimiento sin límites ha dado lugar a una gran degradación medioambiental y ecológica, así como a un aumento de los niveles de desigualdad. Dentro de este sistema, la producción, el intercambio y el consumo son *“ajenos a los ciclos de recuperación del medio ambiente, así como a la reproducción social (como demuestran los supuestos subyacentes de elasticidad infinita de la reproducción social)”*.⁴¹

Este sistema extractivista, forjado a su vez a través de relaciones de poder desiguales entre el Norte y el Sur globales enraizadas en la esclavitud, el racismo, el colonialismo y el patriarcado, da forma a nuestras sociedades y leyes, desregula los derechos laborales, mercantiliza y privatiza los recursos naturales y los servicios esenciales, liberaliza el comercio, la inversión y los flujos financieros, facilitando la extracción de riqueza y recursos en forma de beneficios empresariales de las personas y el planeta. El auge de la financiarización de la economía real en las últimas décadas está subyugando al aparato político y económico a un papel de servicio a las necesidades de los propietarios del capital internacional y a la búsqueda interminable del crecimiento del PIB, ignorando los límites de los recursos del planeta.⁴²

La medida económica dominante -el crecimiento del PIB- no tiene en cuenta el bienestar de la sociedad en general, y contribuye a restar importancia al papel crucial de la inversión a largo plazo del sector público en la promoción del desarrollo, los derechos humanos y la igualdad de género. Desde la década de 1940, cuando se propuso por primera vez el crecimiento del PIB, se ha criticado esta medida por invisibilizar la reproducción social, en particular el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres.⁴³ Desde la década de 1990, el movimiento ecofeminista ha puesto de manifiesto cómo ignora la necesidad de los ciclos de recuperación del medio ambiente, así como los límites planetarios y de los recursos naturales.⁴⁴ El valor de los seres humanos no puede reducirse a su contribución al PIB, ignorando todas las demás formas en que las personas viven y se sostienen mutuamente en comunidades, sociedades y ecosistemas.

Pero este indicador inadecuado sigue impulsando gran parte de la política económica y conduce a decisiones políticas perjudiciales. Tal y como se reconoce en la [Declaración sobre el Derecho al Desarrollo](#), que afirma que el “desarrollo” es un *“proceso económico, social, cultural y político integral, que tiene por objeto la mejora constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución equitativa de los beneficios que de él se derivan”*. Para alcanzar esta visión del desarrollo sería necesario abandonar, o al menos minimizar, el PIB como constructo central de la economía del desarrollo y emplear en su lugar Indicadores de Desarrollo Humano que prioricen la salud y la educación, el bienestar y los ecosistemas: es decir, la resiliencia.

En realidad, estamos asistiendo a un aumento vertiginoso de los niveles de desigualdad dentro de muchos países y entre ellos, lo que permite a las empresas multinacionales registrar beneficios récord y a los multimillonarios disparar su riqueza (véase el [Informe de Oxfam sobre el estado de la desigualdad 2022](#)), en un momento en que la mayor parte del mundo se tambalea por los efectos del COVID-19, la angustia de la deuda, los conflictos, las crisis del costo de la vida y la catástrofe climática. El papel cómplice del FMI en parte de esto es reconocido ahora por algunos de sus propios investigadores, quienes han identificado la creciente desigualdad como un obstáculo para el crecimiento y han argumentado que el [neoliberalismo ha sido sobrevalorado](#) por el IMF.⁴⁵

3.1: CUANTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO

El FMI debe esforzarse por reconocer y cuantificar realmente el desproporcionado trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así como reconocer y comprometerse a abordar cómo el asesoramiento político del FMI aumenta esta carga y, por tanto, la desigualdad de género, cuando se recortan los servicios públicos y la protección social.

Como declaró el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) en 2017: “Los responsables políticos han ignorado en gran medida estos costos económicos y sociales considerablemente relacionados con el género, porque el trabajo de cuidados con demasiada frecuencia se da por sentado y se hace invisible en las evaluaciones y los datos económicos convencionales. Sin embargo, sus modelos y políticas de ajuste fiscal serían política y económicamente inviables si se tuvieran en cuenta estos costos relacionados con el género”.⁴⁶ Como se afirma en el documento del FMI de 2019, Reducing and Redistributing Unpaid Work: Stronger Policies to Support Gender Equality (Reducir y redistribuir el trabajo no remunerado: Políticas más enérgicas para apoyar la igualdad de género): “[r]educir y redistribuir el trabajo no remunerado es una cuestión macrocrítica,” en la medida en que impide a las mujeres participar en el mercado laboral, limitando así el crecimiento económico.

Sin embargo, este perjudicial enfoque instrumentalista no reconoce la enorme brecha existente en la política de cuidados, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que las mujeres ya trabajan más (remuneradas o no, y cuantificadas o no en el PIB), que los hombres: **las mujeres representan el 76% de los 2.000 millones de trabajadores a tiempo completo no remunerados en el mundo.**⁴⁷ Hasta que este trabajo no remunerado o mal remunerado se contabilice, reconozca, reduzca y redistribuya mediante inversiones en servicios públicos que tengan en cuenta las cuestiones de género, y se preste mayor atención a la necesidad de un trabajo decente (según la definición de la OIT), que incluya salarios dignos, permisos parentales remunerados y el derecho a participar en la negociación colectiva, no se lograrán los efectos multiplicadores para la participación de las mujeres en la población activa y la estabilidad económica, y los esfuerzos para lograr la igualdad de género se verán limitados. Por si fuera poco, la actual campaña de austeridad está empujando a las mujeres a asumir las carencias en la prestación de cuidados mediante el recorte de los servicios públicos, o la “prestación de servicios por cuenta propia”.

Para consultar algunos recursos útiles, véase: Guiding principles and minimum standards on unpaid care and domestic work (Principios rectores y normas mínimas sobre el trabajo doméstico y de trabajo no remunerado).

Austeridad por todas partes

El modelo de consolidación fiscal del FMI (que en realidad no es más que el término más reciente para austeridad) existe desde los Programas de Ajuste Estructural de los años ochenta y noventa (calificados de “perniciosos y posiblemente innecesarios”⁴⁸). A pesar de haber sido rebautizado, este modelo en realidad nunca ha desaparecido, sino que de hecho fue impulsado durante la crisis financiera de 1996 en Asia y América Latina, y la respuesta de 2008 a la debacle financiera. Aunque se ha producido un cierto cambio de retórica a nivel central, es preocupante que, a escala nacional, la política del FMI siga presionando a favor de un espacio de política fiscal restrictivo, incluso cuando los países aún se tambalean por los efectos de la pandemia o luchan contra el impacto de la crisis climática. Hoy en día, las condiciones políticas del FMI siguen centrándose en la consecución de unos objetivos de sostenibilidad fiscal y de deuda estrechamente especificados, y acaban sirviendo a los intereses de instituciones financieras muy poderosas del sector privado. De hecho, ahora nos enfrentamos a una nueva era de la austeridad más generalizada, posterior al COVID, impulsada en parte por el FMI, que recaerá sobre el 85% de la población del planeta en 2022, y cuyo impacto de género quedará en gran medida oculto.⁴⁹



El Dr. Bader Al-Khouli, especialista del hospital Al-Shifa'a de Gaza, se lamenta: “Necesitamos más personal de enfermería y sanitario”. Pero quizás sobre todo “Necesitamos que se detenga la escalada”.
CRÉDITO: ACTIONAID

3.2: QUÉ ES AUSTRERIDAD?

Las políticas de austeridad suelen consistir en una combinación de recortes del presupuesto público, congelación de la masa salarial del sector público, despidos de trabajadores públicos, aumento de los impuestos regresivos sobre el consumo junto con la reducción de los impuestos progresivos sobre la renta, el patrimonio y las sucesiones, reformas de las pensiones y la seguridad social, reformas o “flexibilización” del mercado laboral (reducciones de los derechos laborales, incluido el derecho a sindicalización y a la negociación colectiva), reducción o eliminación de las subvenciones y privatización de activos públicos, incluso mediante el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas (APP),⁵⁰ así como mediante la desinversión o la venta de empresas estatales, con el objetivo expreso de reducir el déficit y la deuda públicos. Los recortes del gasto siempre se anteponen a los esfuerzos por aumentar los ingresos, y en cuanto a la política fiscal, el asesoramiento tiende a ser regresivo, centrándose en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y evitando el aumento de los impuestos directos sobre la renta, beneficios, dividendos, patrimonio, etc. Suele haber esfuerzos compensatorios para ayudar a los más pobres, mediante planes de protección social con objetivos muy concretos, pero rara vez llegan a la mayoría de quienes los necesitan. (Véase [The Public Versus Austerity](#))

Mucha gente da por sentado que el Estado ha “retrocedido” desde la aplicación de las políticas económicas neoliberales en la década de 1970, pero en realidad el **Estado ha sido efectivamente redistribuido**. En lugar de prestar servicios a sus ciudadanos, el Estado se ha rediseñado para servir y facilitar la economía de mercado, mediante el desarrollo de instituciones y reglas universales, normas políticas y protecciones jurídicas. En la práctica, la formulación de políticas neoliberales ha construido sociedades en torno a los actores privados que conforman “el mercado”, garantizando que las **instituciones faciliten la extracción y acumulación de riqueza**. Las instituciones financieras internacionales, como el FMI, el Banco Mundial y la OMC, disciplinan al Estado neoliberal para que se adhiera y normalice los marcos políticos que permiten la mercantilización o comercialización de sectores clave de la economía, el beneficio de los bienes públicos y la reducción de la toma de decisiones responsable.

Como señala Bhumika Muchhala, de la Red del Tercer Mundo, “el ajuste estructural subraya el *‘fundamentalismo fiscal’ por encima de la igualdad económica y social y el logro de los derechos humanos*”.⁵¹ Los gobiernos aspiran a reducir sus déficits fiscales como prioridad de primer orden. Gran parte de las críticas al asesoramiento político del FMI se derivan de esta visión macroeconómica ortodoxa, que promueve un presupuesto público reducido para los servicios y da prioridad a la prudencia fiscal a costa de otras consideraciones, como la igualdad social, económica y de género.⁵² La “estabilidad económica” se promueve como un valor inherente que los mercados financieros y sus opiniones sobre la “sostenibilidad de la deuda” y el “espacio fiscal” arbitran mejor. Mientras tanto, se **persigue un crecimiento agregado interminable medido en PIB que no tiene en cuenta el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado ni los límites planetarios**.

El mito central de este enfoque es la idea de que recortar los presupuestos públicos puede estimular el crecimiento económico: “austeridad expansiva”. Bhumika Muchhala también observa que “*según las actuales normas de disciplina fiscal, se supone que muchos países carecen de espacio fiscal suficiente para emprender inversiones públicas. El grado de espacio fiscal está efectivamente circunscrito por los límites impuestos a la deuda pública de un país en relación con el PIB*”. Este enfoque a muy corto plazo significa que los límites de deuda están definiendo la sostenibilidad fiscal a corto plazo, ignorando la interacción entre la política fiscal y el crecimiento a largo plazo. Muchhala prosigue: “*Las directrices actuales para evaluar el espacio fiscal y la sostenibilidad ignoran para qué se utiliza el espacio fiscal. La mayoría de los presupuestos clasifican por separado los presupuestos corrientes y los de capital, pero esta distinción no se hace al evaluar los déficits fiscales. El resultado son unos objetivos fiscales restrictivos, que han provocado un descenso de la relación entre inversión pública y PIB en muchos países*”.⁵³

3.3: ZAMBIA: GENIO Y FIGURA...

En septiembre de 2022, el Gobierno de Zambia se vio obligado a acordar un nuevo préstamo con el FMI. A pesar de las aspiraciones del Gobierno de invertir en educación y sanidad, la directora nacional de ActionAid Zambia, **Nalucha Nganga Ziba**, observó:

“Este programa se basa en el tradicional paquete de austeridad del FMI. En solo 38 meses se está empujando a Zambia a pasar de un déficit del 6% a un superávit del 3,2%, y esto se va a lograr mediante recortes significativos en algunas áreas cruciales del gasto y algunos aumentos de impuestos que pasen la carga a la mayoría pobre en lugar de a las personas y empresas más ricos”.

“A principios de este año, el gobierno del Presidente Hakainde Hichilema se comprometió firmemente a hacer gratuita la educación desde la primera infancia hasta el segundo ciclo de secundaria, y ha contratado a 30.000 nuevos profesores para hacer frente a la grave escasez de docentes. Sin embargo, ahora que los sueldos del sector público están tan ajustados y es probable que la matriculación escolar aumente drásticamente en todos los niveles educativos, el número de alumnos por clase aumentará en todas partes, y en 2025 la escasez de profesores será más aguda que nunca”.

“Hay serias preocupaciones por la abrupta eliminación de los subsidios a los combustibles y la electricidad, dejando a los ciudadanos de Zambia completamente expuestos a la salvaje volatilidad de los precios de los combustibles en el mercado internacional tras la guerra de Ucrania. Con el tiempo, es importante eliminar gradualmente el apoyo de los contribuyentes a la industria de los combustibles fósiles, pero sigue habiendo razones para apoyar las soluciones renovables. Mientras muchos otros países exploran la introducción de controles de precios y subsidios en respuesta a las actuales subidas de los precios de los combustibles, Zambia se verá obligada a hacer lo contrario”.

“En resumen, este programa del FMI no traslada la carga a los que más pueden pagar. No tiene una lente de equidad, y menos de equidad de género”.

Aunque los préstamos del FMI suelen estar condicionados a la “consolidación fiscal” (austeridad), las condiciones suelen ser poco realistas y, por tanto, no se cumplen, y los aumentos de la deuda conducen a una nueva ronda de préstamos y a más restricciones presupuestarias.⁵⁴ Las políticas de austeridad rara vez resuelven el problema de la sostenibilidad de la deuda y, en cambio, exacerban las desigualdades. De hecho, se ha demostrado que la austeridad inhibe la actividad económica (medida en PIB), aumenta el desempleo y reduce los ingresos fiscales, lo que conduce a mayores niveles de déficit, restringiendo aún más el espacio fiscal. Esto significa que los países que ya gastan mucho más en el pago de la deuda que en gasto social tienen que seguir endeudándose solo para pagar el servicio de su deuda.⁵⁵

El caso de Ecuador muestra constantes restricciones en el presupuesto del sector salud desde 2018, a medida que aumenta el presupuesto del servicio de la deuda.⁵⁶ En realidad, existe una relación inversa (el aumento del servicio de la deuda se correlaciona con disminuciones en el presupuesto del sector salud), y esto se mantuvo incluso durante la pandemia de COVID-19 en 2020. En este año, el presupuesto gastado en el sector de la salud fue del 8,63% del presupuesto general del Estado, mientras que la deuda se llevó el 14,83% del mismo.

En los países del Sur global, el espacio fiscal se ve limitado por la deuda de larga duración, que alcanzó su punto crítico durante la pandemia de COVID-19. La deuda pública aumentó de una media del 40,2% al 62,3% del PIB entre 2010 y 2020.⁵⁷ Munevar observa que, en 2020, la financiación destinada al servicio de la deuda pública externa era mayor que el gasto en sanidad y educación en al menos 62 y 36 países, respectivamente. Veinticinco

de los países que gastan más en deuda que en sanidad se encuentran en el África subsahariana.⁵⁸ Mientras los gobiernos con problemas de liquidez intentan frenar el gasto para pagar su deuda, es probable que la situación de la salud de las mujeres en muchos países empeore.⁵⁹ Los problemas de sostenibilidad de la deuda no pueden resolverse país por país cuando los problemas están tan extendidos, y sin embargo no se han producido nuevos procesos significativos de endeudamiento internacional desde la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, de carácter temporal, durante el apogeo de COVID-19. Los activistas de la deuda reclaman un **nuevo mecanismo de resolución de la deuda** que no ponga a los países endeudados en las manos del FMI, y mecanismos de condonación de la deuda más completos.

Cuadro 1: Relaciones del servicio de la deuda pública externa* - Media de países por región (2016-2020)

	# de países	Servicio de la deuda en porcentaje de los ingresos públicos		Relación entre el servicio de la deuda y			
		2016	2020	Sanidad		Educación	
		2016	2020	2016	2020	2016	2020
Europa y Asia Central	20	7,6	14,1	0,8	1,4	0,6	1,0
América Latina y Caribe	23	10,9	14,2	0,8	1,0	0,6	0,7
África subsahariana	41	8,1	14,6	1,1	2,1	0,4	0,8
Asia Oriental y Pacífico	16	5,6	14,7	0,8	1,5	0,5	0,9
South Asia	8	7,7	27,1	1,0	2,6	0,4	1,2
Oriente Medio y Norte de África	10	13,1	42,3	1,0	1,5	1,2	1,6

*Utilización de los últimos datos disponibles a nivel nacional sobre el gasto público en sanidad y educación.

Fuente: Cálculos de Eurodad basados en Roefinitiv.

Como demuestran las evidencias una y otra vez, y como sostienen muchas economistas, sindicalistas y activistas de la sociedad civil feministas, en realidad, *“los objetivos macroeconómicos excesivamente restrictivos para reducir el gasto público (...) provocan recesiones y tienen costos económicos, políticos, [laborales] y de derechos humanos reales, que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres”*.⁶⁰ Esto contraviene las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, y los principios de derechos humanos de no regresión y no discriminación.

Estas políticas de austeridad, o “consolidación fiscal”, pueden afectar los derechos de las mujeres de diversas maneras. Sin embargo, es su impacto acumulativo el que resulta especialmente devastador. Como señaló el CDES en 2017, la retirada de los servicios públicos de guardería en los países se suma a los aumentos de los impuestos sobre el consumo y a la menor aplicación de las normas laborales contra la discriminación, en detrimento del acceso de las mujeres a la igualdad salarial y al trabajo decente.⁶¹ Los recortes en los empleos de primera línea del sector público en los que las mujeres son mayoría, como el sector sanitario y el de la educación, se dejan sentir en forma aguda. El CDES señala que *“socavar las protecciones laborales a menudo conduce a un trabajo más precario, a mayores diferencias salariales y a un aumento de la carga de cuidados no remunerados entre las mujeres”*,⁶² que cubren las carencias de cuidados y otros servicios públicos cuando disminuyen los ingresos y el acceso a bienes públicos de calidad.⁶³ Sin embargo, el trabajo de cuidados no remunerado *“no suele tener cabida en los modelos y análisis macroeconómicos”*.⁶⁴ Véase, por ejemplo, el estrecho enfoque de las respuestas del FMI y los gobiernos a la pandemia del COVID-19 en el “sector productivo”, con énfasis en las empresas formales y el sector privado.⁶⁵ Esto oculta el impacto diferenciado de género de las crisis y la carga adicional que suponen para las mujeres.

Para evitar las críticas, el FMI aboga por unas redes de seguridad social y unos programas de género limitados y “específicos”, pero insuficientes para paliar el impacto sistémico de sus políticas más generales. Es de vital

importancia reforzar los sistemas de protección social basándose en el principio de universalidad antes de eliminar progresivamente los subsidios.⁶⁶ La retórica progresista ocasional del FMI y la cooptación de algunos conceptos de justicia social e igualdad de género no pueden ocultar la realidad de su asesoramiento político coercitivo y las condiciones impuestas a sus préstamos que socavan sistemáticamente las inversiones en servicios públicos - y los múltiples impactos que esto tiene sobre las mujeres.

El asesoramiento del FMI a los países va a la zaga de la investigación

Varias investigaciones y artículos de debate del FMI cuestionan esta ortodoxia neoliberal y han mostrado de forma bastante convincente los errores de la institución, demostrando lo equivocadas que han sido desde el punto de vista económico las “medidas de consolidación procíclicas” para los países en crisis.⁶⁷ Se acepta así que el pago de la deuda no siempre es la mejor respuesta a todos los déficit fiscales⁶⁸ y más bien puede ser contraproducente.⁶⁹ También existe evidencia contundente de los graves efectos distributivos de la austeridad,⁷⁰ lo cual desmiente el mito de la “austeridad expansiva”.

Por otra parte, la adopción de medidas fiscales progresivas puede ser fundamental para evitar una espiral descendente,⁷¹ y las investigaciones del FMI muestran que una fiscalidad más sólida y progresiva no es perjudicial, sino fundamental para la financiación pública en tiempos de tensión económica.⁷² Esta investigación sostiene que los países deben equilibrar cuidadosamente los recortes del gasto social con el aumento de los ingresos. En su principal evaluación sobre el financiamiento de los ODS, el departamento de asuntos fiscales del FMI aconsejó que la mayoría de los países de renta baja podrían aumentar razonablemente sus ratios impuestos/PIB en cinco puntos porcentuales (del 16% al 21% en promedio), lo que permitiría duplicar el gasto en educación, asistencia social y sanidad en la mayoría de los países. Pero nada de esto se incluye en el asesoramiento político estándar a escala nacional. Los equipos del FMI en los países no están prestando suficiente atención a las pruebas producidas por los propios investigadores del FMI, lo que significa que esta clara alternativa a la austeridad, que beneficiaría especialmente a los derechos de las mujeres y las niñas, no es evidente en la práctica a nivel de país ni en los acuerdos formales.

En 2020, una investigación del FMI examinó las “intervenciones de política fiscal sensibles al género”, afirmando que *“es imperativo analizar las repercusiones macroeconómicas y distributivas de las políticas fiscales sensibles al género para que los responsables políticos puedan adoptar las medidas más eficaces y sostenibles para apoyar la igualdad de género y al mismo tiempo impulsar el crecimiento económico y reducir la desigualdad de ingresos y la pobreza”*.⁷³ A continuación, afirma que *“la política fiscal es una herramienta poderosa para cerrar las brechas de género”*, aunque reconoce que *“la mayoría de estas medidas tardan en dar fruto”*.⁷⁴ ONU Mujeres y las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer llevan mucho tiempo señalando este hecho, y los Estados lo han reconocido en la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín de 1995.⁷⁵ La contrapartida de las políticas fiscales sensibles al género es que cualquier otra política fiscal está, como mínimo, manteniendo las desigualdades de género y, en el peor de los casos, reforzando las desigualdades de género y socavando los avances en la eliminación de las *“disparidades de género”*, como las denomina el FMI en su recién aprobada Estrategia para la integración de la perspectiva de género (véase la sección 5). Una vez más, el FMI parece reconocer cómo políticas como las que prescribe a menudo socavan directamente los derechos de las mujeres, incluyendo cómo exacerban sus cargas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, obstaculizando el acceso a servicios públicos de calidad y obligándolas a realizar trabajos precarios mal remunerados. Pero, una vez más, esto no cambia la política o la práctica fundamental a nivel nacional.



Los centros comunitarios de atención a la infancia, como este de Bardiya (Nepal), pueden reducir significativamente el tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidados no remunerado.
CRÉDITO: ACTIONAID

4. REPERCUSIONES DE GÉNERO DEL ASESORAMIENTO SOBRE AUSTERIDAD DEL FMI SOBRE LAS LIMITACIONES DE LA MASA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Aunque son muchas las formas en las que las políticas de austeridad del FMI tienen un claro impacto de género, merece la pena analizar en detalle las limitaciones de la masa salarial del sector público, ya que ponen de manifiesto el impacto del asesoramiento político del FMI sobre los derechos humanos de las mujeres. La congelación o el recorte de la masa salarial del sector público ha sido un elemento central del asesoramiento en materia de austeridad durante décadas, y el efecto acumulativo de estas medidas a lo largo de 40 años es alarmante, ya que socava la capacidad de los gobiernos para prestar servicios públicos de calidad que tengan en cuenta las cuestiones de género. Un estudio realizado en septiembre de 2022 por Isabel Ortiz y Matthew Cummings reveló que *“los ajustes de la masa salarial del sector público están muy extendidos en todo el mundo y están siendo estudiados por 91 gobiernos de 27 países de renta alta y 64 países en desarrollo”*.⁷⁶

Las limitaciones de la masa salarial del sector público aplicadas como parte de las políticas de consolidación fiscal repercuten en forma directa y desproporcionada en la carga de trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres y en su acceso a un trabajo decente.⁷⁷ Es más probable que las mujeres trabajen en el sector público (donde hay alguna evidencia de que las diferencias salariales entre hombres y mujeres son menores).⁷⁸ Por ejemplo, el 90 por ciento del personal de enfermería en todo el mundo y más del 70 por ciento del personal sanitario son mujeres.⁷⁹ Una investigación realizada por ActionAid, la Internacional de Servicios Públicos y la Internacional de la Educación reveló que los recortes de austeridad del FMI en solo 15 países entre 2016 y 2021 han bloqueado la contratación de más de 3 millones de enfermeras, profesores y otros trabajadores esenciales del sector público.⁸⁰ Solo en esos 15 países, los recortes recomendados por el FMI suman casi 10.000 millones de dólares estadounidenses. Esto

significa que cuando el FMI aconseja restricciones en la masa salarial, especialmente en contextos en los que existe una escasez documentada de personal clave, socava directamente su propio compromiso declarado de aumentar la participación de las mujeres en la población activa.⁸¹

Esta investigación conjunta mostró cómo el recorte de los presupuestos destinados a pagar a los trabajadores del sector público **socava los avances en sanidad, educación e igualdad de género, al tiempo que bloquea la acción por el clima** en algunos de los países más pobres del mundo. A pesar de las afirmaciones del FMI de que la contención de la masa salarial es una medida temporal, se aconsejó a los 15 países estudiados que recortaran o congelaran la masa salarial del sector público durante tres o más años. Incluso cuando el FMI afirma proteger a los trabajadores de la sanidad y la educación, en la práctica esto es imposible porque éstos constituyen el grupo más numeroso de la masa salarial del sector público, por lo que no se pueden lograr recortes globales sin congelar al menos el gasto en profesores y enfermeras.

La investigación también encontró que el **FMI no asesoraba de forma coherente a los países sobre alternativas a los recortes salariales**, por ejemplo, cómo aumentar el espacio fiscal incrementando los ingresos fiscales mediante reformas progresivas. La consecuencia es que los recortes salariales del sector público, supuestamente temporales, se convierten a menudo en casi permanentes. Por otro lado, un aumento de un punto en el porcentaje del PIB destinado a la masa salarial del sector público en estos 15 países permitiría contratar a 8 millones de enfermeras, profesores y otros trabajadores. Si esto se hiciera a escala mundial, se podría hacer frente a la brecha mundial en materia de cuidados calculada por la OIT, y las mujeres se beneficiarían especialmente de los puestos de trabajo creados gracias a las inversiones en infraestructuras de asistencia social. Esto da una idea de la magnitud del impacto de las limitaciones actuales y su efecto acumulativo a lo largo del tiempo. De hecho, muchos países podrían aumentar razonablemente el porcentaje del PIB destinado a la masa salarial en bastante más del 1%, lo que podría tener un efecto transformador en todos los servicios públicos.

La investigación en profundidad de ActionAid sobre los recortes salariales en el sector público reveló que perjudican triplemente a las mujeres y a las personas con discriminaciones cruzadas, a través de: (1) la pérdida de trabajo decente en el sector público; (2) la pérdida de acceso a los servicios; y (3) el aumento de la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado cuando fallan los servicios públicos. A continuación, examinamos cada tipo de impacto con más detalle, con ejemplos y pruebas de países seleccionados.



ACCESO A UN TRABAJO DIGNO - INGRESOS Y SEGURIDAD ECONÓMICA DE LAS MUJERES COMO TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO

Para las mujeres, el sector público suele ser una importante fuente de empleo.⁸² **La presión para recortar la masa salarial del sector público ha exacerbado la escasez de enfermeras, cuidadores, médicos y profesores en muchos países, lo que ha socavado los resultados de la sanidad y la educación, especialmente en el Sur global.** Además de bloquear las nuevas contrataciones que han invertido tiempo, energía y recursos en formación, los límites a la masa salarial global del sector público conducen a recortes y congelaciones de los salarios de la mano de obra existente, incluso cuando éstos ya son bajos. Los salarios de los trabajadores de primera línea del sector público que desempeñan funciones más subalternas se ven especialmente afectados, y esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que éstas se concentran en funciones de primera línea (por ejemplo, enfermeras, maestras, trabajadoras sociales), puestos administrativos de menor nivel y puestos temporales y a tiempo parcial, que suelen tener contratos más precarios, irregulares o sin contrato y peor pagados.⁸³ Esto se debe a las **normas sociales discriminatorias y a la segregación ocupacional, y los recortes de estos servicios empujan a muchas mujeres al subempleo y al desempleo, al trabajo precario o a la economía sumergida**, con daños duraderos para la seguridad económica, los ingresos y los bienes de las mujeres, y en algunos casos aumentando la brecha salarial de género.⁸⁴ Este enfoque de los recortes de la masa salarial del sector público está en contradicción con el enfoque del FMI sobre la participación de las mujeres en la población activa.

4.1: NEPAL: LOS RECORTES SALARIALES DEL SECTOR PÚBLICO PERJUDICAN LA EDUCACIÓN Y A SUS TRABAJADORES

Según una investigación de ActionAid Nepal, el país necesita actualmente emplear a 67.000 profesores permanentes para cumplir los planes del gobierno, mientras que hay 40.000 profesores con contratos temporales, bien contratados por el gobierno local con una remuneración comparativamente baja, bien profesores de relevo con contratos temporales pagados por la comunidad.⁸⁵ Debido a los cierres de escuelas relacionados con el COVID, muchos profesores temporales de escuelas privadas han sido despedidos, lo que suscita preocupación tanto por su bienestar como por el impacto en las escuelas cuando la vida vuelva a la normalidad.

Nuestra revisión de los documentos del FMI muestra que Nepal ha estado bajo presión para recortar y congelar la masa salarial del sector público, a pesar de que ya es increíblemente baja. Con solo el 11% del presupuesto nacional destinado a la educación, la situación del sector es desesperada. **Esto tiene una fuerte dimensión de género, ya que la mayoría de los profesores contratados mal pagados son mujeres, lo que refleja las tendencias generales de Nepal, donde las mujeres cobran un 30% menos que los hombres.**⁸⁶

Esto hace que **las mujeres soporten la carga de las limitaciones salariales**, una carga que la actual crisis del costo de la vida está incrementando aún más. Estas limitaciones agravan la brecha salarial de género y la desigualdad económica más amplia que se manifiesta a lo largo de la vida de las mujeres, incluso en relación con las cotizaciones a la pensión y la inseguridad económica en la edad adulta. El compromiso de ampliar la educación infantil, por ejemplo, se ha visto mermado por el hecho de que, en la actualidad, la mano de obra depende de mujeres⁸⁷ que trabajan con salarios de miseria (entre 70 y 130 dólares mensuales⁸⁸). Se está luchando por mejorar esta situación, pero actualmente se ve restringida por las limitaciones de la masa salarial. La expansión a nuevas áreas es difícil cuando los salarios del sector público ya están al límite.⁸⁹

TESTIMONIO DE TRABAJADORES DE PRIMERA LÍNEA EN NEPAL

Tulsi Neupane: *“Soy profesor de inglés y director de la escuela básica Lalit Bikas. Soy miembro de la Asociación de Profesores de Nepal. Nuestros salarios han permanecido estancados durante los últimos cuatro años. Después del COVID, conocí a muchos profesores de escuelas públicas que no cobraban sus sueldos y/o perdieron su empleo. Creo que es una pérdida para el sistema educativo que tantos profesores experimentados no vuelvan nunca más y que, en su lugar, tengamos que contratar a profesores sin experiencia ni formación.”*

Prakash Thapa: *“Soy profesor de inglés en la escuela secundaria Shramjit Kishor desde hace 22 años. Llevo 37 años enseñando. El recorte salarial no es un fenómeno reciente. Solía recibir complementos por ser profesor, por vigilar los exámenes y por revisar los exámenes de los alumnos, etc. En los últimos diez años he perdido todos esos complementos. Nuestros ingresos se han erosionado gradualmente”.*

Fuente: Testimonios recogidos por la Internacional de la Educación

La UNESCO calcula que se necesitarán 69 millones más de profesores en los próximos diez años para alcanzar el objetivo de los ODS de acceso universal a la educación primaria y secundaria para 2030. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que **en el mundo faltan 5,9 millones de enfermeras**, casi el 90% de ellas en países de ingresos bajos y medios. Para suplir esta escasez es necesario contratar nuevos profesionales y hacer frente a los bajos salarios de la profesión de enfermería.⁹⁰ Es probable que la crisis asistencial en muchos países implique que en el futuro se necesiten aún más trabajadores de primera línea. Esto será inalcanzable mientras el FMI siga aplicando restricciones contundentes a la masa salarial del sector público que no dejan margen de maniobra a los ministerios de finanzas.

4.2: BANGLADESH: REPERCUSIONES DEL COVID EN EL TRABAJO REMUNERADO Y NO REMUNERADO DE LAS MUJERES

El 91,8% del empleo total de las mujeres en Bangladesh se encuentra en el sector informal. Trabajadoras domésticas, propietarias y trabajadoras de pequeños negocios, jornaleras, vendedoras ambulantes, limpiadoras, trabajadoras del sexo, incluidas transexuales, y otras trabajadoras del sector informal perdieron rápidamente sus medios para obtener ingresos debido al COVID-19. Miles de trabajadores migrantes, incluidas las mujeres migrantes retornadas, perdieron sus empleos, con pocas esperanzas de reincorporación. Incluso en el sector formal, se denunciaron pérdidas masivas de puestos de trabajo de trabajadoras del sector de la confección, aunque algunas fábricas de ropa han empezado a abrir. En estos casos, la seguridad de los trabajadores, incluidas las trabajadoras, sigue siendo motivo de preocupación.

El sistema sanitario de Bangladesh está dominado por las mujeres: más del 94% de los enfermeros y más del 90% de los trabajadores sanitarios comunitarios son mujeres. Ellas son las más vulnerables a las infecciones y arriesgan su vida. Durante el COVID, un gran número de trabajadoras sanitarias necesitaban apoyo para equilibrar el aumento de la carga de trabajo y las obligaciones familiares, por ejemplo, manutención infantil, redes de seguridad, apoyo en salud mental, pero recibieron muy poco.

Las mujeres también se llevaron la peor parte del aumento del trabajo de cuidados no remunerado.

En Bangladesh, antes del COVID, las mujeres realizaban de media 3,43 veces más trabajo de cuidados doméstico no remunerado que los hombres. El cierre de las escuelas y la permanencia de toda la familia en casa agravó aún más la carga del trabajo de cuidados no remunerado sobre las mujeres, que absorbieron la carga adicional de las constantes tareas de cuidado familiar. Cuando los sistemas sanitarios se vieron desbordados por los esfuerzos para contener la pandemia, las mujeres dedicaron más tiempo a actividades no remuneradas de cuidado de adultos, como proporcionar atención emocional y apoyo administrativo a los adultos, además de cocinar, limpiar y hacer reparaciones.

Fuente: ActionAid Bangladesh

Muchos sindicatos han denunciado que los salarios de la educación pública están muy por debajo de los niveles básicos de la cesta de pan, la cesta de la pobreza alimentaria o la cesta de la renta básica.

- Un informe de **ActionAid Zimbabue** revela que profesores, enfermeros y médicos se llevan la peor parte de los agresivos recortes en la masa salarial del sector público del país. Esto ha llevado a que los trabajadores esenciales de primera línea luchen por salir adelante con salarios de miseria. Los niveles salariales sufrieron un duro golpe en 2019 en particular, cuando los ingresos medios de los docentes y los trabajadores sanitarios ni siquiera alcanzaron el umbral de pobreza de la cesta de alimentos, es decir, la capacidad de los salarios para alimentar a una familia media de cinco miembros.⁹¹ A medida que la inflación causa estragos en los salarios de los docentes, muchos están abandonando el sector.⁹²
- **ActionAid Sierra Leona** informó que, aunque a primera vista la masa salarial del sector educativo parece estar aumentando (en términos nominales un 65% desde 2017), en términos reales ha disminuido un 5%. Además, como las matriculaciones escolares han aumentado como resultado del nuevo compromiso de educación gratuita, la proporción de alumnos por profesor ha crecido de 60:1 en 2017 a 75:1 en 2021, y el análisis muestra que la brecha de maestros ha crecido de 51,524 a 69,074. Los profesores adicionales necesarios para reducirla al nivel recomendado internacionalmente de 40:1 aumentarán la masa salarial actual del profesorado en un 20%.⁹³

A pesar de las afirmaciones del FMI de que la educación y la sanidad están “protegidas” o exentas de los recortes salariales, no encontramos pruebas de ello en dos tercios de los países que estudiamos.⁹⁴ Incluso cuando existen exenciones para proteger a profesores y enfermeras, el efecto puede ser la congelación de sus salarios, lo que con el tiempo constituye un recorte salarial en términos reales. Un análisis de género y distributivo de esta política, como se sugiere en la estrategia de género, lo demostraría. Pero ¿tendrían los resultados de este análisis el peso suficiente para revertir en el futuro el recurso del FMI a los recortes salariales? ¿O solo conduciría a un pequeño programa compensatorio y específico para algunas mujeres?

4.3: GHANA: ENFERMERAS SE QUEDAN SIN TRABAJO DEBIDO A LOS RECORTES SALARIALES DEL SECTOR PÚBLICO⁹⁵

Ghana está negociando su 17° programa con el FMI, y sería clave una evaluación del impacto de género y distributivo de las principales políticas de este programa. Las mujeres han sufrido un impacto desproporcionado, ya que representan más del 75% de la función pública.

En Ghana, 41.000 enfermeros, en su mayoría mujeres, están en paro y han formado un sindicato de enfermeros desempleados, al tiempo que escasea el personal sanitario. Un estudio de ActionAid Ghana reveló una tasa de vacantes del 41%, es decir, 47.758 vacantes en los servicios sanitarios. Mientras tanto, el país cuenta con una media de un médico por cada 8.132 habitantes, muy por encima del umbral mundial de la OMS de un médico por cada 1.000 habitantes.

A pesar de estas carencias crónicas, el gasto sanitario ha experimentado un fuerte descenso, pasando del 9,6% del presupuesto en 2016 al 5% en 2020. La proporción de la masa salarial del sector público en el gasto total ha disminuido en los últimos años, ya que el aumento del servicio de la deuda ha erosionado aún más los presupuestos públicos. Esto se ha vuelto cada vez más insostenible, ya que el porcentaje de los ingresos públicos destinados a la deuda ha aumentado por encima del 40% entre 2016 y 2019, y por encima del 55% en 2020. Esta cifra cuadruplica el umbral sostenible del 12% establecido por el FMI.

A modo de contexto, entre 2016 y 2020, el Gobierno ghanés ha gastado en el servicio de la deuda el doble de lo que ha gastado en todos los empleados públicos del sector educativo y sanitario juntos. Los aumentos salariales en la educación han caído constantemente por debajo de la tasa de inflación desde 2016, y la escasez de docentes sigue sin resolverse. Ghana necesita contratar alrededor de un 15% más de profesores de primaria cada año de aquí a 2030, algo casi imposible mientras persistan las limitaciones salariales.

Fuente: ActionAid Ghana, Trends in Public Sector Wage Bill (Education and Health) and the Forces Behind Wage Freezes.

Efectos agravados por los recortes “selectivos” de la protección social

Es la combinación de medidas de austeridad lo que afecta especialmente a las mujeres, a la seguridad de sus ingresos y al acceso a la salud. No es de extrañar que la **disminución de los salarios de las mujeres y de su acceso a bienes, servicios y recursos públicos vitales profundice la desigualdad**, amenazando los derechos humanos de las mujeres a *“la vivienda, la alimentación, la seguridad social y un nivel de vida adecuado”*.⁹⁶ A menudo, los gobiernos han impuesto **recortes radicales a las medidas de protección social, como el seguro de desempleo, el subsidio de vivienda, las prestaciones por hijos a cargo y las prestaciones por discapacidad**,⁹⁷ lo que significa que las mujeres no solo pierden su trabajo o se enfrentan a una disminución de sus salarios en términos reales en el sector público, sino también potencialmente a otras fuentes de seguridad económica.

El FMI suele aconsejar una “focalización” limitada de los programas de protección social. Este tipo de acceso restringido a la protección social es *“notoriamente difícil y a menudo no llega a los más pobres”*,⁹⁸ debido a los grandes errores de exclusión que hacen que estos programas no sean muy precisos.⁹⁹ Esto se observa en Túnez, donde hay *“fugas hacia los no pobres de casi el 60 por ciento de la transferencia de efectivo existente”*.¹⁰⁰ El FMI incluso aconseja “redes de seguridad selectivas” en países donde la pobreza está muy extendida y arraigada.¹⁰¹ Acceder a estos programas puede ser más difícil para las mujeres. Por ejemplo, en Jordania, *“solo el 1,27% de los hogares encabezados por mujeres reciben asistencia del Fondo Nacional de Ayuda, en comparación con el 5,93% de los hogares encabezados por hombres”*.¹⁰² Las transferencias monetarias condicionadas basadas en la asistencia escolar de los hijos han formado parte de los programas de protección social selectiva recomendados por el FMI en Túnez, Jordania y Egipto, sobrecargando a las mujeres con un incremento del trabajo doméstico y de cuidados (remunerado y no remunerado). **Estos programas se basan en el trabajo invisible de las mujeres, al tiempo que refuerzan la división sexual del trabajo al disuadir a los hombres de realizar trabajos de cuidados**.¹⁰³ El Proyecto

Bretton Woods señala lo siguiente: *“Estos programas son una importante fuente de ingresos para muchas personas, pero especialmente para las mujeres, debido a la persistente brecha salarial de género y a otros factores que concentran en mayor medida a las mujeres en los deciles de ingresos más bajos”*.¹⁰⁴

Además, las mujeres suelen quedar excluidas de muchos planes de protección social porque trabajan más en el sector informal, sin protección formal.¹⁰⁵ Durante la pandemia de COVID-19 ha habido una falta demostrable de evaluación de género y necesidades en los paquetes de respuesta de los gobiernos, lo que ha repercutido en la igualdad de acceso de las mujeres a la protección social. Por ejemplo, en Sudáfrica, la selección de los beneficiarios supuso que a más de 7 millones de mujeres -en su mayoría mujeres africanas negras con bajos ingresos- se les negara el acceso a los subsidios de emergencia del país. Su *“inelegibilidad se derivaba directamente de las normas sociales patriarcales existentes que asignaban a las mujeres la responsabilidad del cuidado de los hijos”* y *“dejaban a estas mujeres sin derecho a recibir la ayuda que millones de hombres africanos negros pobres han estado recibiendo”*. Documentada por People’s Recovery Tracker, esta exclusión ilustra cómo los fondos de recuperación exacerbaban las diferencias existentes.¹⁰⁶

Cuadro 2: Relaciones salariales entre mujeres y hombres en 2019 por región

	Sector privado	Salud
Global	Las mujeres ganan el 75% de lo que ganan los hombres	Las mujeres ganan el 88% de lo que ganan los hombres
África	Las mujeres ganan el 69% de lo que ganan los hombres	Las mujeres ganan el 91% de lo que ganan los hombres
Sur de Asia	Las mujeres ganan el 58% de lo que ganan los hombres	Las mujeres ganan el 86% de lo que ganan los hombres
LAC	Las mujeres ganan el 85% de lo que ganan los hombres	Las mujeres ganan el 96% de lo que ganan los hombres

Fuente: Banco Mundial, Cuadro de indicadores de la burocracia en el mundo

A igual trabajo, igual salario

Los documentos políticos del FMI sugieren en forma sistemática que el hecho de que los salarios del sector público sean más altos que los del sector privado es un problema.¹⁰⁷ Se dice que la llamada “prima salarial pública” “distorsiona” el mercado laboral y, en los informes del Artículo IV, el FMI aconseja regularmente a los países que comparen los salarios del sector público con los del privado, lo que con frecuencia permite justificar recortes salariales efectivos - o aumentos salariales por debajo de la inflación - para los trabajadores del sector público.

Una dimensión interesante de este hecho es que la prima salarial pública suele ser mayor para las mujeres y los empleos poco cualificados que para los hombres y los empleos altamente cualificados.¹⁰⁸ Esto significa que las mujeres tienen más probabilidades de asegurarse un trabajo y un salario dignos en el sector público, mientras que el sector privado parece explotar a las mujeres, y en particular a las trabajadoras poco cualificadas. De hecho, la diferencia salarial entre hombres y mujeres es diez puntos porcentuales menor en el sector público que en el sector privado formal.¹⁰⁹ El sector de cuidados privatizado y externalizado en el Norte global es un ejemplo perfecto de cómo los sectores privatizados explotan a las trabajadoras. Esto agrava el problema más general de que las funciones asociadas a los cuidados y que se perciben como de género suelen estar peor pagadas. El resultado de las comparaciones entre el sector público y el privado que realiza el FMI se deja sentir inevitablemente de forma más aguda en las mujeres que trabajan en puestos de primera línea en el sector público, que suelen ser las primeras en sufrir recortes salariales.

4.4: TESTIMONIOS DE PRIMERA LÍNEA EN NEPAL

Suman Giri Shrestha, oficial de enfermería: *“Estudí enfermería por mi cuenta e intenté ser feliz con mi profesión. Pero cuando oigo hablar del FMI, me siento frustrada. Reducir el presupuesto en el sector sanitario es como cocinar sin sal. Una reducción del financiamiento público en el sector sanitario repercute en los salarios de los trabajadores sanitarios, así como en sus competencias y en los servicios que prestan. Es un error eliminar esto del presupuesto. Quiero que el FMI sitúe al sector sanitario en el centro de los servicios públicos y deje de presionar al Gobierno para que reduzca la financiación en este sector.”*

Fuente: Testimonios recogidos por la Internacional de Servicios Públicos (ISP)



EL RETROCESO DEL GASTO PÚBLICO RESTRINGE EL ACCESO A LOS SERVICIOS ESENCIALES

La masa salarial pública constituye una gran parte del gasto público y del costo de prestación de algunos servicios públicos como educación y sanidad. Esto se debe a que requieren mucha mano de obra, por lo que los **recortes salariales y la restricción de personal suelen exigir cambios en la forma de prestar los servicios, qué servicios se prestan y quién tiene derecho a utilizarlos**. En última instancia, los recortes reducen la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios públicos. Algunos de los efectos más nocivos de los recortes presupuestarios en los servicios públicos,¹¹⁰ *“se derivan de la forma en que exacerban las barreras a las que a menudo se enfrentan las mujeres para acceder a servicios públicos de calidad”* y tienen *“repercusiones desproporcionadas y a largo plazo”*.¹¹¹

En algunos casos, los **recortes presupuestarios se han aplicado directamente a programas y servicios que benefician ante todo a las mujeres**,¹¹² tales como atención infantil, educación, salud y los derechos sexuales y reproductivos y la salud materna. Cuando se recortan los presupuestos públicos de educación, las escuelas suelen trasladar los costos a los padres. Los hogares pobres, incapaces de pagar la escolarización de todos sus hijos, dan prioridad invariablemente a los varones, por considerarlos una mejor inversión económica. Cuando se recortan los presupuestos sanitarios y aumentan los costos de la atención médica, las normas patriarcales de género hacen que los hogares opten a menudo por pagar las tasas hospitalarias y los costos de los medicamentos de los hombres y los niños antes que los de las mujeres y las niñas.

El cuidado temprano de los niños puede transformar las oportunidades en la vida tanto de las mujeres como de las niñas. Aldea de Kozhilakudi en Kerala, India. CRÉDITO: ACTIONAID



4.5: EFECTOS DE LOS RECORTES DEL GASTO EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS SANITARIOS EN NIGERIA Y AL AGUA EN GHANA

Abigail es madre de dos hijos y una de las dos matronas que trabajan en un centro sanitario integral de **Nigeria**. Explica lo que suponen los recortes en el gasto para las caóticas condiciones de la primera línea: *“Según la norma de la OMS, se espera que una enfermera atienda a cuatro pacientes, pero si entras aquí, verás la multitud. Hoy tenemos hasta 150 mujeres en atención prenatal, y solo hay dos enfermeras de guardia”. Para Abigail, el hecho de que les paguen tan poco a final de mes empeora las cosas: “No podemos permitirnos los gastos escolares de nuestros hijos, tuvimos que retirar a algunos de ellos. Así que cuando las cosas mejoren, como creemos y esperamos, volverán a empezar”.*

Fuente: Todos los nombres han sido cambiados en estos testimonios reales, recogidos por la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

Ghana: El costo del acceso al agua se convierte en una doble carga para las mujeres jóvenes, que tienen que hacer malabarismos para encontrar dinero con el que comprar agua y prestar servicios relacionados con el trabajo de cuidados no remunerado. *“El gobierno tiene mucho que hacer para abastecer de agua a las comunidades porque, incluso con los aspectos de privatización en marcha, la gente gasta mucho dinero para conseguir agua y la demanda también es muy alta... así que deberían tenerlo en cuenta en sus presupuestos... y ser sensibles a las cuestiones de género para que las mujeres dediquen menos tiempo a buscar agua y tengan tiempo para otras tareas importantes... cuando hablamos de ser sensibles a las cuestiones de género, [no es solo] para las mujeres sino para todo el mundo... en nuestra escuela, hospitales, etc. Es difícil ir a un hospital y pedir un aseo... aunque lo tengan, lo designarán solo para el personal”.*¹¹³

Fuente: ActionAid Ghana, Documento informativo Gender Responsive Public Services and Macro-Economic Policy in Ghana.

A pesar de esta evidencia, el FMI (y el Banco Mundial) recomiendan a menudo introducir y aumentar las tarifas al usuario. Por ejemplo, en **Vietnam**, que se ha enfrentado a seis años de recortes y/o congelaciones de la masa salarial del sector público, el Artículo IV de 2016 señaló: *“las autoridades... esperan contener el gasto social aumentando las tarifas de la sanidad y la educación públicas para incentivar un mayor uso de los servicios privados”* y *“las autoridades... señalaron planes para aumentar la participación de agentes no estatales en la educación y la sanidad para reducir los costos para el presupuesto.”* Esto fue luego celebrado en el informe del Artículo IV de 2018, que observó que *“las tarifas más altas en salud y educación mantuvieron el gasto corriente bajo control.”* Hay un cierto reconocimiento de los riesgos potenciales involucrados: *“las reformas para aumentar la recuperación de costos e introducir la educación y la sanidad privadas deben diseñarse cuidadosamente para garantizar el acceso a todos y proteger a los pobres al tiempo que se aumenta la calidad del servicio.”* Sin embargo, esto no reconoce las repercusiones de género, y no refleja realmente las pruebas de que **la privatización casi siempre aumenta las desigualdades y perjudica sustancialmente el acceso de quienes sufren marginación social y económica** basada en los ingresos, y en múltiples opresiones que se entrecruzan, como la raza, la casta, la religión, la orientación sexual o la identidad de género. Tampoco explica por qué la gente debería pagar dos veces por el acceso a los servicios públicos: en primer lugar, a través de sus impuestos y, en segundo lugar, a través de las tarifas de acceso (la forma más regresiva de impuesto).

En algunos casos, se deniegan explícitamente a determinados grupos servicios que antes estaban a su disposición, por ejemplo, cuando las mujeres inmigrantes ya no pueden acceder a la atención sanitaria reproductiva gratuita. En 2015, el CDES constató que, en España, *“como consecuencia del Real Decreto 16/2012, las mujeres inmigrantes en situación irregular ya no podían acceder a la asistencia sanitaria sexual y reproductiva no relacionada con la maternidad.”*¹¹⁴



LA AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA AUMENTA EL TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO Y LA POBREZA DE TIEMPO

El modo en que los recortes salariales del sector público y las medidas de austeridad más generales aumentan el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres y la pobreza de tiempo es de enorme importancia. El trabajo doméstico y de cuidados son una base del desarrollo sostenible, esencial para la vida cotidiana, para la reproducción social de las personas y para la supervivencia de toda la sociedad.¹¹⁵ Una encuesta realizada por ONU Mujeres en

2021 en Ecuador refleja que, debido a los recortes en el sector sanitario, los despidos en el sector público y la congelación salarial, 7 de cada 10 mujeres tienen pobreza de tiempo, y el 48% declaró que el trabajo de cuidados no remunerado era su actividad principal.¹¹⁶ ActionAid Bangladesh realizó una encuesta sobre el uso del tiempo que reveló que las mujeres dedicaban, de media, ocho horas al día al trabajo de cuidados no remunerado. Los hombres dedican alrededor de una hora y media diaria. Por otro lado, las mujeres dedican alrededor de una hora al día al trabajo remunerado, mientras que los hombres dedican cinco horas al trabajo por el que cobran.¹¹⁷

Todas las medidas de austeridad tienden a *“intensificar la carga de trabajo no remunerado de las mujeres y su pobreza de tiempo.”*¹¹⁸ Por ejemplo, los recortes (o la continua falta de inversión) en infraestructuras de agua y transporte en los países más pobres hacen que las mujeres tengan que pasar largas horas recogiendo agua y desplazándose a los puestos de trabajo, las clínicas y las oficinas gubernamentales, a menudo a pie. Cuando se producen recortes en servicios públicos como la sanidad, la atención a las personas mayores, los cuidados paliativos y los cuidados infantiles, la necesidad de cuidados no desaparece, simplemente la responsabilidad se transfiere de la esfera pública a la privada, a cuidadores no remunerados en el hogar que, debido a normas sociales arraigadas, suelen ser mujeres.¹¹⁹

4.6: SIERRA LEONA: LOS RECORTES SALARIALES EN EL SECTOR PÚBLICO LIMITAN LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

La guerra civil de Sierra Leona, que terminó en 2002, dejó el país con unos servicios públicos deteriorados, una escasez crónica de personal y algunos de los peores resultados del mundo en sanidad y educación. Desde entonces, se han puesto en marcha varias iniciativas ambiciosas. En 2010, se anunció la Iniciativa de Asistencia Sanitaria Gratuita, con el objetivo de reducir los desembolsos para las madres embarazadas y lactantes y los padres de niños menores de cinco años.

A pesar de estos ambiciosos objetivos (y de los numerosos retos), entre 2016 y 2021, Sierra Leona ha recibido una orientación presupuestaria coherente en los documentos de préstamo del Artículo IV y del Servicio de Crédito Ampliado del FMI para recortar la masa salarial del sector público hasta un objetivo del 6% del PIB. Nuestro informe nacional en Sierra Leona encontró que, si bien la masa salarial de los trabajadores sanitarios aumentó en términos nominales de 2017 a 2021, en términos reales disminuyó un 15%.

Se trata de un reto enorme en un país que aún se tambaleaba por el ébola cuando se produjo el COVID-19. El Gobierno ha intentado ampliar y reconstruir el personal sanitario tras el ébola (que se cobró la vida de 257 trabajadores sanitarios). En 2020, con la crisis del COVID-19 afectando al país, el Gobierno aumentó en 5.000 el número de trabajadores sanitarios y anunció un aumento del 30% en sus salarios, con el objetivo de dar un pequeño impulso a una plantilla diezmada y sobrecargada. Dadas las continuas restricciones de la masa salarial, es probable que esto provoque recortes más profundos en otros ámbitos.

Fuente: ActionAid Sierra Leona, *Public versus austerity report on trends in public sector wage bill for the health and education sectors in Sierra Leone.*

Esta denominada “superexplotación” de las mujeres por parte de los responsables políticos de los gobiernos y del FMI significa que *“no se trata solo de que los recortes del gasto aumenten inadvertidamente el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres. Más bien, esos recortes se basan en el supuesto implícito o explícito de que las mujeres llenaran los vacíos generados, en la provisión de servicios que el Estado tiene la responsabilidad de prestar, con lo cual se crea una “ilusión de eficiencia.”*¹²⁰ Estas políticas se proponen bajo el supuesto de que los hogares asumirán *“el trabajo que antes proporcionaba o subvencionaba el Estado,”*¹²¹ transfiriendo de hecho esta mano de obra de nuevo a la “prestación de servicios por cuenta propia”, tal y como la OIT ha definido el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.¹²² **Las políticas de austeridad hacen que las mujeres “absorban el golpe involuntariamente” y se conviertan en “proveedoras de cuidados de facto.”**¹²³ En especial, se supone que las mujeres en las intersecciones de la marginación *“compensan la falta de servicios realizando trabajo corporal en nombre del Estado.”*¹²⁴ Bhumika y Guillem concluyen: *“La incapacidad o falta de voluntad del Estado para proporcionar servicios y bienes que garanticen los derechos económicos y sociales de las mujeres marginadas crea inseguridad y vulnerabilidad crónicas”.* En esencia, esto está facilitando una regresión de los derechos de las mujeres y redundando *“en detrimento de la capacidad de obtener ingresos, la educación, la salud y el tiempo libre de las mujeres.”*¹²⁵

4.7: VIETNAM: EVIDENCIA CONTUNDENTE DE LOS DIARIOS DE USO DEL TIEMPO

Desde 2015, ActionAid Vietnam ha estado desarrollando un programa de investigación y promoción a largo plazo centrado en el trabajo de cuidados no remunerado y el impacto que la distribución desigual de los cuidados tiene en las mujeres, los hombres, la sociedad y la economía. Este programa opera en nueve zonas rurales e incluye una encuesta de tiempo diario, iniciativas de cambio de comportamiento de la comunidad, análisis de políticas y promoción. Algunas de las principales conclusiones son las siguientes:

- **5 horas al día:** la media de tiempo que las mujeres dedican al trabajo de cuidados no remunerado en las primeras encuestas del diario de tiempo de ActionAid.
- **54 días laborables al año:** la cantidad de tiempo que cada mujer de un distrito podría ahorrar si tuviera un mejor acceso al agua y al saneamiento.
- **50 horas al mes:** la **cantidad** media de tiempo que las mujeres con hijos menores de seis años dedican al cuidado de los niños.
- **5 millones de horas al mes:** la **cantidad** de tiempo que las mujeres podrían ahorrar si se pusieran a su disposición 100.000 plazas más de guardería.
- **47 millones de dólares:** la contribución que **esas** mujeres harían a la economía cada año si invirtieran su tiempo en trabajo de cuidados remunerado en la economía, en lugar de en trabajo de cuidados no remunerado. Esto también aumentaría los ingresos de sus hogares en 40 dólares.
- **57 minutos al día:** la reducción media del tiempo dedicado por las mujeres al trabajo de cuidados no remunerado al final de los dos años del proyecto de investigación y defensa. Esto equivale a 29 horas al mes.
- **8 horas semanales:** la cantidad de tiempo extra que las mujeres de la investigación dedicaban al trabajo remunerado al final del estudio.

Fuente: ActionAid International, *Who Cares for the Future (Quién cuida al future)*, p6

4.8: OBSERVACIONES DEL EXPERTO INDEPENDIENTE DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA DEUDA

En el informe de 2018 sobre el Impacto de las reformas económicas y las medidas de austeridad en los derechos humanos de las mujeres, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre los efectos de la deuda externa reconoció que, "las cuestiones económicas y regulatorias deben apuntar a abordar las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres que están en el centro de la desigualdad de género." Concluyeron que "para sacar a la luz estos sesgos políticos... es esencial una evaluación del impacto de las políticas de reforma económica sobre los derechos humanos que tenga en cuenta las cuestiones de género", y subrayaron que estas evaluaciones "pueden orientar a los responsables políticos a la hora de idear soluciones alternativas que sean inclusivas y promuevan la igualdad de género y los derechos humanos", en consonancia con las obligaciones estatales existentes en virtud de los marcos internacionales de derechos humanos, así como los compromisos con los ODS.

Según el Experto Independiente, una vez expuesto el impacto negativo de las políticas económicas actuales, el FMI debe abordar de manera significativa estos factores macroeconómicos de la desigualdad de género con políticas alternativas. Esto significaría dotar de recursos a las políticas económicas transformadoras de género y diseñarlas de manera que reduzcan y redistribuyan la carga de trabajo no remunerado de las mujeres y mejoren su acceso a formas de trabajo decente, en lugar de precario. Las políticas económicas que refuerzan los derechos de las mujeres a través de multiplicadores económicos y sociales incluyen sistemas fiscales progresivos, servicios públicos universales con perspectiva de género financiados con fondos públicos y protección social, y medidas para garantizar el acceso a un trabajo decente.

4.9: PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS

Según los principios rectores de las Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto de las reformas económicas sobre los derechos humanos, “los Estados están obligados a gestionar sus asuntos fiscales y a adoptar políticas económicas que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos.” Esto significa que “los Estados y otros acreedores, incluidas las instituciones financieras internacionales, deben demostrar que las medidas de reforma económica que proponen cumplirán, y no menoscabarán, las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos”. Esto implica el deber de llevar a cabo evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos para valorar y abordar cualquier efecto previsible de sus políticas económicas sobre los derechos humanos.” Esto también deja muy en claro que: “Consultar y publicar en formatos adecuados los resultados de las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos son componentes importantes del cumplimiento de esta obligación.”¹²⁶



“Enmarcando la tributación feminista”: Hacer que los impuestos beneficien a las mujeres.
CRÉDITO: GLOBAL ALLIANCE FOR TAX JUSTICE



Activistas contra la violencia de género en Nyamahumba, distrito de Nyanga, Zimbabwe.
CRÉDITO: ACTIONAID

5. LA ESTRATEGIA DE GÉNERO DEL FMI: ALGUNAS REFLEXIONES PRELIMINARES

Durante la mayor parte de su historia, el FMI ha sido ciego al género, considerando que las cuestiones sociales en general son ajenas a su ámbito de responsabilidad. No se consideraba que el género tuviera importancia para la macroeconomía, o que mereciera la pena analizarlo en términos del impacto de las políticas macroeconómicas. En otras palabras, la igualdad de género no se consideraba “macrocrítica” para el FMI.¹²⁷

Esto ha ido cambiando lentamente desde 2013, aunque la sociedad civil no quedó impresionada por los primeros comentarios ad hoc que se negaban a reconocer la centralidad del género en las políticas macroeconómicas, ignoraban el trabajo en torno al cuidado no remunerado y la economía informal y evitaban cualquier compromiso con economistas feministas y organizaciones de mujeres en países donde se había emitido asesoramiento sobre políticas de género. El FMI fue acusado en 2019 de “*utilizar a las mujeres y la igualdad de género como instrumentos para el crecimiento económico en lugar de perseguir un modelo económico que funcione para las mujeres y la sociedad en general*”.¹²⁸

Solo recientemente el FMI ha identificado la desigualdad de género como una cuestión “macrocrítica”,¹²⁹ es decir, una cuestión que afecta a la macroeconomía en general y que, por tanto, entra dentro del mandato del FMI. Esto debería situar los impactos de género de la consolidación fiscal en un lugar más destacado de la agenda de la institución. El FMI nombró a un nuevo asesor principal en cuestiones de género y, en julio de 2022, publicó su primera [Estrategia para la integración de la perspectiva de género \(Strategy towards Gender Mainstreaming\)](#).¹³⁰ Esta estrategia fue aprobada por el Directorio del FMI, que está compuesto por los directores ejecutivos de los países miembros (donde el poder de voto se basa en las contribuciones financieras, privilegiando así los intereses de los países ricos).¹³¹

Esta estrategia emite un mandato para que se establezca una “unidad de género e inclusión” central y para “integrar el género” en las funciones básicas del FMI de supervisión, préstamo y desarrollo de capacidades (o asistencia técnica). La estrategia también establece que se evaluará “*el impacto diferenciado por género de las perturbaciones y las políticas, y se proporcionará asesoramiento granular y adaptado en materia de política macroeconómica y financiera*”. Este tipo de evaluación de los efectos diferenciados por género de los choques y las políticas es algo que las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, economistas feministas y otros colectivos han reclamado ya que el enfoque actual, que no tiene en cuenta las cuestiones de género, ha provocado una y otra vez efectos perjudiciales para las mujeres. Sin embargo, no está claro que se vayan a aplicar sistemáticamente. Además, hay algunos aspectos muy preocupantes en la nueva estrategia, como las referencias a la condicionalidad de género dentro de los préstamos de los programas y un enfoque estrechamente orientado a la mitigación de los daños identificados, como se explica a continuación.

Figura 1: Planes del FMI para integrar la estrategia de género

¿Dónde está el FMI?		¿Adónde quiere llegar el FMI?
<p>Vigilancia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todavía no hay un enfoque sistemático para la selección de países • Caja independiente/párrafo/SIP • Seguimiento limitado 	➔	<p>Vigilancia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enfoque ecuánime y coherente basado en la macrocrítica • Asesoramiento detallado y específico para cada país • Integración en los debates políticos básicos • Seguimiento en consultas posteriores • Creación de un centro de datos centralizado • Herramientas internas y formación interna del personal mediante un plan de estudios estructurado.
<p>Préstamo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limitaciones en los criterios de selección, la cobertura política y el seguimiento de la condicionalidad de los programas • 6 países en 4 años 	➔	<p>Préstamo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apropiación por las autoridades; seguimiento • Adaptado y específico; evaluación de la criticidad
<p>Desarrollo de capacidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principalmente formación y talleres con un enfoque fiscal, en medio de una creciente demanda de capacitación elaborada a la medida. 	➔	<p>Desarrollo de capacidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrado con vigilancia y préstamos • Proporcionar más capacitación/formación específica para cada país • Añadir análisis desglosados por género a los productos de DC existentes (por ejemplo, FSSR).
<p>Colaboración ad hoc con otras IFI</p>	➔	<p>Fortalecer la colaboración con otras IFI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear redes, buscar sistemáticamente aportaciones

Fuente: Cifras de la estrategia de género del FMI

5.1: VISIÓN CENTRAL DE LA ESTRATEGIA DEL FMI PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

“La visión de la Estrategia de Género del FMI estará basada en tres principios fundamentales:

1. Cumplir el mandato del FMI centrándose en colmar las brechas de género que son (i) macrocríticas en la supervisión; (ii) críticas para la implementación y el seguimiento de los programas respaldados por el Fondo; y (iii) dentro de las áreas de especialización del FMI para el desarrollo de capacidades.
2. Proporcionar liderazgo de pensamiento a escala mundial y asesoramiento de política macroeconómica detallado y adaptado a los países miembros.
3. Centrarse en maximizar el impacto sobre el terreno, incluso mediante la colaboración con instituciones asociadas y el compromiso con otras partes interesadas.”

La **estrategia en su conjunto** se articula en torno a **cuatro pilares fundamentales**:

1. Recogida de **datos desglosados por sexo** y desarrollo de herramientas de modelización que permitan al personal realizar análisis políticos;
2. Un **marco de gobernanza** sólido para un enfoque equitativo entre los miembros basado en la macrocriticidad del género. Los consejeros pidieron “*articular criterios claros para evaluar la macrocriticidad de las cuestiones de género y hacer operativa esta evaluación*”.
3. **Fortalecimiento de la colaboración con socios externos** para beneficiarse del intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre iguales, aprovechar las complementariedades y maximizar el impacto sobre el terreno.
4. El **uso eficiente de los recursos** asignados al género mediante la creación de una unidad central para realizar economías de escala y apoyar a los equipos nacionales.

Fuente: Estrategia de género del FMI

A continuación, identificamos algunos términos y conceptos clave de la estrategia de género del FMI, y en cada caso, hacemos algunas observaciones y reflexiones críticas sobre las cuestiones que se plantean:

La estrategia de género del FMI dice	Observaciones / Reflexiones
¿Desigualdad de género o igualdad de género sustantiva?	
<p><i>El FMI apoyará a sus “países miembros para fomentar economías resilientes e inclusivas ayudándolos a abordar las diferencias de género y mejorar la capacitación económica de las mujeres”.</i></p> <p>El FMI conceptualiza tres formas en que las disparidades de género influyen en el crecimiento económico y la estabilidad macrofinanciera: a través de las diferencias de género en oportunidades, resultados y funciones decisorias.</p>	<p>¿Cómo define el FMI las “brechas de género” y cómo las compara con las normas de derechos humanos? Los marcos de derechos humanos orientan a los Estados sobre cómo cumplir con sus obligaciones en materia de derechos de la mujer, con marcos jurídicos internacionales, regionales y nacionales bien establecidos sobre los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género que la mayoría de los Estados miembros han ratificado, como la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín de 1995,¹³² la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (CEDAW) con su concepto de igualdad sustantiva de género¹³³ y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,¹³⁴ que estableció principios de no discriminación, pero también de no regresión y de movilización del máximo de recursos disponibles para los derechos, junto con compromisos para hacer realidad las obligaciones básicas constitucionales o leyes y políticas de igualdad de género nacionales. Al ignorar estos marcos de derechos humanos, el FMI carece de puntos de referencia creíbles para comprender o tomar medidas sobre las brechas sustantivas de género.</p> <p>La igualdad de género sustantiva, tal y como se define en la CEDAW, subraya que “la igualdad formal puede no ser suficiente para garantizar que las mujeres disfruten de los mismos derechos que los hombres”. Hay problemas con un encuadre basado en esperar que las mujeres “alcancen a los hombres” y sean juzgadas por estándares masculinos. La igualdad sustantiva, en contraposición a las “brechas de género”, significa tener en cuenta las formas en que se diferencian las mujeres de los hombres, y compensar o adaptarse a la diferencia, disparidad o desventaja. Cualquier iniciativa o política debe garantizar “que estas diferencias sean reconocidas y respondidas por las medidas e intervenciones del Estado para lograr la igualdad”, señala <i>International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific</i>: “Una política aparentemente neutra desde el punto de vista del género, aunque no excluya a las mujeres per se, puede dar lugar a una discriminación de facto contra ellas”.¹³⁵ La Estrategia parece referirse a esto como igualdad en el “resultado”, y menciona la participación de las mujeres en la población activa y las desigualdades salariales como ejemplos, pero la igualdad no equivale necesariamente al cumplimiento de los derechos.</p>
Trabajo de cuidados no remunerado	
<p>El FMI se refiere a: “impulsores de las brechas de género”, afirmando que “reflejan y conducen a una mayor desigualdad de oportunidades y resultados: acceso desigual a la educación, los servicios sanitarios, las infraestructuras, los activos y la tecnología; derechos legales desiguales; violencia contra las mujeres; distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado entre hombres y mujeres; y factores culturales.”</p>	<p>Si bien es importante que se reconozca la desproporción presente en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizan las mujeres, esto debe aplicarse de manera mucho más sistemática, de modo que se reconozcan y aborden plenamente las repercusiones de las políticas de austeridad, como los recortes de la masa salarial, en esa carga desigual que suponen los cuidados no remunerados. El FMI aún no ha aceptado que “es precisamente el trabajo de cuidados no remunerado el que compensa el fracaso de la prestación pública”. En este sentido, las mujeres encarnan el aprovisionamiento social, y podría considerarse que el Estado tiene una deuda con el trabajo de las mujeres en la producción de los servicios de los que es responsable”.¹³⁶</p> <p>Lamentablemente, el trabajo de cuidados no remunerado no recibe suficiente atención en ninguna otra parte del documento principal de la estrategia, lo que resulta impactante dada su importancia para los derechos de las mujeres. Y aunque el FMI dice cada vez más que comprende la importancia de la desigualdad económica y de género, parece que sigue evitando establecer el vínculo con el impacto de su propio asesoramiento político. Y lo que es más preocupante, incluso si el FMI aceptara las pruebas contundentes de que sus políticas de austeridad socavan los derechos de las mujeres y aumentan la carga de los cuidados no remunerados, no está claro que esto fuera suficiente para revertir el asesoramiento político básico sobre austeridad. En la actualidad, la austeridad parece un monstruo fuera de control, y la Estrategia de Género del FMI hará poco por detenerla.</p>

Vigilancia y macrocrítica

En su labor de supervisión o en las consultas del Artículo IV,¹³⁷ el FMI afirma que pasará *“de la cobertura del género como un tema en su mayor parte aislado y a menudo con un seguimiento limitado, a un enfoque más sistemático basado en un tratamiento coherente y ecuatoriano de los países miembros, acorde con el carácter macrocrítico de las brechas de género, y en la prestación de un asesoramiento detallado y adaptado que se integre en los debates políticos básicos”*.

Los propios países también pueden plantear cuestiones de género macrocríticas, pero el FMI no asesorará allí donde no tenga experiencia.

El FMI no es un experto en cuestiones de género, no debería asesorar a los países en materia de igualdad de género, sino evaluar cómo sus políticas económicas afectan y socavan la igualdad de género. Sugiere que trabajará en colaboración con otros (véase más abajo), pero debería reconocer y aprovechar más explícitamente la experiencia de las economistas feministas y de las organizaciones que sí la tienen. La imprecisa norma de macrocrítica significa que no habrá una evaluación sistemática de los efectos perjudiciales para la igualdad de género de la política habitual del FMI.

Disparidades de género y crecimiento económico

El FMI afirma que *“la integración de la perspectiva de género en el FMI comienza con el reconocimiento de que la reducción de las disparidades de género va paralelo a un mayor crecimiento económico, una mayor estabilidad y resistencia económicas y una menor desigualdad de ingresos”*.

La reducción de las disparidades de género no siempre o automáticamente va de la mano de un mayor crecimiento económico. De hecho, la persistencia de las disparidades de género y la explotación del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres a menudo sustentan el crecimiento económico. Depende del tipo de disparidad de género y del tipo de crecimiento económico, y es vital tener un enfoque más matizado.

Esto también plantea la cuestión de si el FMI seguirá aplicando políticas de crecimiento económico incluso cuando se considere que perjudican a las mujeres.¹³⁸ En términos más generales, existen muchas críticas feministas al crecimiento en sí mismo y a la forma en que se mide (PIB, véase la sección 3). La estrategia no hace nada por cuestionar la búsqueda del crecimiento, que resulta cada vez más problemática ante una crisis climática que podría exigir un compromiso activo con la reducción del crecimiento y la adopción de objetivos y medidas de desarrollo más sostenibles y basados en el cuidado.

El impacto del propio FMI

La Estrategia de Género del FMI afirma que: *“las políticas económicas y financieras pueden exacerbar o reducir las disparidades de género”*.

Teniendo en cuenta el influyente papel que desempeña el FMI en el establecimiento de la agenda macroeconómica y en la determinación de las políticas monetarias, financieras, fiscales y de gasto, esto se aproxima al reconocimiento de que las propias políticas económicas y financieras del FMI pueden empeorar la desigualdad de género. PERO esta no es una postura coherente que se mantenga a través de los documentos de estrategia de género, que en ningún momento reconocen explícitamente el papel del FMI en el establecimiento de políticas que puedan exacerbar las disparidades de género.

Poder y responsabilidad desiguales

El FMI afirma que su *“poder de convocatoria” le permite “dar mayor relieve a las cuestiones de género de macrocríticas ante sus interlocutores directos -ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales- que formulan y aplican las políticas macroeconómicas y financieras nacionales”*. En esta *“función catalizadora o de convocatoria”*, el personal del FMI reunirá a las *“partes interesadas pertinentes”*, incluidas las nacionales, como los diversos ministerios competentes (por ejemplo, finanzas, economía, género, trabajo, sanidad, educación y desarrollo social), organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado para debatir *“cómo podrían contemplarse las políticas macroeconómicas y del sector financiero desde una perspectiva de género”*.

Es bueno que se reconozca en cierta medida el poder del FMI, ya que este suele restar importancia a su propio poder a la hora de configurar las políticas y afirma que los gobiernos nacionales son siempre los que llevan la voz cantante y tienen la plena responsabilidad. Sin embargo, los acuerdos alcanzados y las políticas aplicadas son muy similares en todos los países, y el único actor que siempre está presente es el FMI. En la práctica, esto demuestra que el FMI tiene algo más que *“poder de convocatoria”*.

Las feministas han cuestionado sistemática y críticamente la legitimidad del FMI para influir o dar forma a lo que deberían ser decisiones políticas nacionales y deberían tomarse democráticamente. La naturaleza a puerta cerrada de la mayoría de las consultas y los limitados actores (a menudo solo organizaciones de la sociedad civil (OSC) que cumplen) invitados a la sala, socavan en la práctica la soberanía nacional y la responsabilidad de los gobiernos ante su propio pueblo. Resulta incómodo pensar que el FMI pueda ser ahora el actor que ponga coercitivamente sobre la mesa las cuestiones de género.

Hay muchos otros actores, incluidas las organizaciones de derechos de la mujer, que estarían en una mejor posición para hacerlo, pero no pueden hasta que el proceso general de toma de decisiones sea más transparente e inclusivo. El FMI debería utilizar su reconocido poder de convocatoria para garantizar un nivel mucho mayor de transparencia e inclusión.

Colaboración y asociaciones externas

El FMI afirma que no es experto en igualdad de género ni en derechos humanos de la mujer, por lo que colaborará con ONU Mujeres y otros socios externos para aprovechar su experiencia.

No está claro si se invitará a estos expertos externos a todos los espacios en los que puedan debatirse políticas que tengan repercusiones de género, o si solo participarán en sesiones específicas centradas estrictamente en cuestiones de género, sin oportunidad de comentar las políticas más estratégicas. Existe el peligro de que ONU Mujeres sea utilizada para aprobar implícitamente políticas económicas conservadoras, mientras que solo puede contribuir a intervenciones de género compensatorias. La propia ONU Mujeres ha sido objeto de críticas por algunos de sus recientes compromisos con múltiples partes interesadas (por ejemplo, con Blackrock, también uno de los acreedores privados del gobierno de Zambia que se niega a reestructurar la deuda), y tendrá que tener cuidado de no ser utilizada para legitimar marcos económicos generales que son problemáticos.

Sería bueno comprometerse también a involucrar a expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos de las mujeres y a otros organismos como la OMS y la UNESCO, que pueden ayudar a mostrar el impacto de género del asesoramiento del FMI en materia de salud y educación. Las colaboraciones externas destacadas tienden a centrarse en el Grupo del Banco Mundial, que tiene un historial problemático en cuanto al impacto de género de sus intervenciones.¹³⁹ La propia estrategia de género del Banco Mundial debe analizarse desde una perspectiva crítica.¹⁴⁰

Organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos de la mujer

La estrategia del FMI menciona poco a la sociedad civil, incluso para que la unidad central sirva de *"punto focal para la colaboración interna y externa... ayudar a conectar a los equipos de los países con las organizaciones pertinentes, grupos de reflexión y OSC"*, y señalando que *"el compromiso temprano con las autoridades del país y otras partes interesadas será fundamental"*.

El compromiso de conectarse con la sociedad civil debe ir más allá. Aunque se hace referencia a "redes externas de asesoramiento en materia de género", no hay ninguna referencia significativa a la participación de las organizaciones feministas o de derechos de la mujer, ni de los sindicatos que representan a las mujeres que trabajan en sectores clave que pueden verse afectados por las políticas del FMI. La participación amplia e inclusiva de la sociedad civil debe ser sistemática, en todas las fases del proceso, y las organizaciones deben tener acceso a toda la documentación clave y una voz significativa para articular el impacto de las políticas sobre los derechos humanos de las mujeres.

Las invitaciones no pueden ser elegidas a dedo por el FMI, sino que deben ser representativas e incluir voces críticas, para evitar que unas "consultas" limitadas conduzcan a lavar la cara de las políticas más perjudiciales del FMI. La disparidad de poder entre el FMI y los expertos locales "consultados" debe evaluarse con mayor honestidad, haciendo un esfuerzo consciente para evitar que cualquier consulta se convierta de facto en un ejercicio de aprobación.

Medidas paliativas y programas específicos

La estrategia del FMI reconoce que la integración de la perspectiva de género: *"implica un cambio de mentalidad sobre cómo llevar a cabo las actividades básicas del FMI sin dejar de ser coherente con el mandato de la institución... Este enfoque prevé integrar las cuestiones de género que son relevantes para los resultados macroeconómicos en los debates sobre política cambiaria, monetaria, fiscal, financiera y estructural con los países miembros. Al mismo tiempo, el asesoramiento del personal debe dar prioridad a la estabilidad interna y externa."*

***Si las medidas recomendadas o aplicadas (por ejemplo, eliminar los subsidios a los combustibles, recortar otros gastos públicos, introducir un impuesto sobre el valor añadido) amplían las disparidades de género o provocan otros efectos distributivos adversos, un paquete político global debe incluir una evaluación de los efectos de género y distributivos de estas políticas y medidas paliativas (como el gasto social) dirigidas a los más vulnerables."* [el subrayado es nuestro].**

En primer lugar, esto deja muy claro que la opinión del FMI sobre la "estabilidad" prevalece sobre su interés por el género.

En segundo lugar, aunque habla de un "paquete integral de políticas", también deja muy claro que este debe estar "dirigido" a los más vulnerables. Esto supone un paso atrás con respecto a la recomendación de la Nota práctica del FMI de 2018 sobre la operacionalización de la igualdad de género en la labor del Fondo, que aboga por una *"combinación alternativa de políticas para evitar estas externalidades negativas."*¹⁴¹

En lugar de prevenir los impactos negativos de género mediante políticas alternativas, la atención se centra ahora en las medidas compensatorias. Los regímenes de protección social selectivos están en contradicción con los compromisos adquiridos por los países, las Naciones Unidas y los ODS en relación con los niveles mínimos de protección social.¹⁴² Es importante señalar que las medidas paliativas selectivas suelen ser muy problemáticas, tienden a tener grandes errores de exclusión y su administración suele ser costosa.

El FMI está diciendo básicamente que no dejará de hacer cosas que son perjudiciales para los derechos de las mujeres, pero que parcheará algunos de los peores efectos para algunas mujeres- a través de programas que se ha demostrado que no funcionan eficazmente.

Datos desglosados por sexo

El FMI afirma que reforzará los datos mediante un centro de datos desglosados por género para hacer visibles las “brechas de género”.

La clave está en qué datos se incluyen y qué es lo que “cuenta”. Esto no está suficientemente claro.

- ¿Incluirá datos no solo desglosados por sexo, sino también interseccionales?
- ¿Permitirán los datos realizar análisis que relacionen la elaboración de políticas macroeconómicas con el trabajo de cuidados no remunerado, la pobreza de tiempo y la participación de las mujeres en el mercado laboral?
- ¿Se utilizarán las encuestas sobre el empleo del tiempo para elaborar políticas macroeconómicas?
- ¿Se prestará más apoyo a los gobiernos para que recopilen estos datos en consonancia con sus compromisos en el marco del ODS 5.4?
- ¿Cómo afrontará el FMI el reto de que los datos siempre van por detrás de la realidad sobre el terreno, no siempre son exhaustivos, pueden hacer invisibles a determinados grupos, como los trabajadores informales, los migrantes, los refugiados, las personas desplazadas, los pueblos indígenas y otros, y a menudo pueden ocultar los efectos agravantes de las discriminaciones entrecruzadas?

Evaluaciones de impacto con perspectiva de género

El FMI se ha comprometido, desde 2018, a realizar un seguimiento del impacto de género de sus programas y se prevé que la estrategia de género lleve esto más allá mediante evaluaciones del impacto de género y distributivo

Tres años después de esta orientación, en 2021, la investigación de ActionAid, la ISP y la Internacional de la Educación no encontró ninguna evidencia de que el FMI hubiera analizado el impacto de género de las restricciones de la masa salarial del sector público en sus documentos del Artículo IV y de préstamo en 15 países¹⁴³ (o de que el FMI buscara políticas alternativas o propusiera medidas de mitigación). El FMI y la mayoría de los ministerios de finanzas no saben cómo afectan sus políticas a las mujeres y a los hombres de manera diferente, porque no lo buscan.

En ausencia de evaluaciones del impacto de su asesoramiento político sobre la masa salarial del sector público, no hay forma de que el FMI esté seguro de que su asesoramiento no perjudica a corto o largo plazo, como señalaron 47 organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y sus aliados en una carta colectiva en marzo de 2022.

Programas de préstamos y condicionalidad de género

La estrategia del FMI se centra en el uso de la condicionalidad de género en los préstamos del FMI.

Esto es alarmante dada la naturaleza problemática y la historia de las condicionalidades del FMI, que ven cómo una poderosa institución dominada por el Norte global infringe el espacio político soberano de los países del Sur global. El propio FMI reconoce que no es un experto en igualdad de género, así que ¿cómo puede imponer de forma creíble la condicionalidad de género? Sería mejor examinar críticamente cómo las condiciones impuestas por el FMI en el pasado han empeorado las desigualdades de género y alejarse definitivamente de tales condicionalidades en el futuro. No tiene sentido utilizar el mismo instrumento de condicionalidad, que tiene un historial tan problemático, para intentar promover una agenda de género. El gran reto para el FMI es afrontar plenamente hasta qué punto su paquete estándar de condiciones de consolidación fiscal socava la igualdad de género, y comprometerse a aplicar políticas alternativas basadas en el trabajo de economistas feministas progresistas.

En resumen, hay algunos elementos en la nueva estrategia de género del FMI que podrían abrir puertas que en el pasado se han cerrado estrepitosamente. Pero existen serias dudas sobre si esta estrategia hace lo suficiente para reconocer y abordar plenamente la magnitud del impacto de género del asesoramiento básico estándar del FMI, en particular cuando se trata de austeridad. No tendrá sentido que el FMI continúe como lo ha hecho durante décadas y se limite a introducir algunos programas especiales para compensar a algunas mujeres a través de programas de seguridad social con objetivos muy limitados. Por esta razón, ActionAid apoya a los movimientos feministas y a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en su rechazo a la Estrategia del FMI para la integración de la perspectiva de género, tal y como se recoge en una carta colectiva dirigida al Director Gerente del FMI.

Este debería ser un momento para que el FMI hablara de acciones más audaces, para que se planteara preguntas más difíciles sobre su propio historial y su práctica actual. El FMI no es un espectador inocente que alerta a los gobiernos del impacto de determinadas políticas sobre el género. Es el arquitecto de esas políticas, y ya debería saber, por las numerosas pruebas disponibles (incluidas las del propio FMI), que esas políticas afectan negativamente a las mujeres. Está claro que el FMI no quiere realmente mirarse a sí mismo ni proponer los cambios que son claramente necesarios en el diseño de sus principales políticas de austeridad.



Agricultoras feministas em Minas Gerais, Brasil, donde la agricultura representa el 67 % del empleo rural y el liderazgo activo de las mujeres en agroecología es crucial. CRÉDITO: ACTIONAID

6. UNA ALTERNATIVA MÁS AUDAZ: RECOMENDACIONES PARA UNA TRANSICIÓN FEMINISTA JUSTA

Como muestra la sección anterior, para lograr un cambio transformador en materia de género, el FMI y los ministerios de finanzas deben alejarse definitivamente del culto a la austeridad. Nunca bastará con adoptar algunas medidas compensatorias para corregir los resultados injustos que se derivan de sus propias intervenciones básicas, ni con implicar a las mujeres de forma más sistemática en el injusto sistema económico existente. Lo que falta es una visión más amplia de una alternativa feminista, justa y verde, y una agenda que construya economías y sociedades basadas en el cuidado. Es posible que el FMI nunca sea capaz de impulsar una agenda transformadora de este tipo porque entraría en contradicción con los propios fundamentos y estructuras de poder de la institución. Pero es útil tener claros algunos de los elementos fundamentales de esta agenda que podrían perseguir los gobiernos progresistas, los ministerios de finanzas ilustrados, las OSC y los movimientos.

UNA VISIÓN MÁS AUDAZ

Más allá del PIB, hacia los derechos humanos, la justicia climática y los cuidados

Mientras las economías se guían obsesivamente por la búsqueda única del crecimiento del PIB, seguirán pisoteando los derechos de las mujeres y el mundo natural. Los gobiernos deben valorar y situar en el centro de sus preocupaciones el cumplimiento de los derechos humanos y la sostenibilidad del medio ambiente. Esto significa establecer diferentes indicadores y objetivos para los ministerios de finanzas, y hacer un seguimiento de diferentes datos para determinar si la economía está teniendo éxito. Significa establecer una agenda clara en torno a alternativas económicas feministas que valoren las inversiones en salud pública, educación y atención a los más vulnerables de nuestras sociedades.

Los cuidados son el foco

Los cuidados y el bienestar son fundamentales para mantener las sociedades y las economías, así como el medio ambiente, y deben valorarse y redistribuirse. Necesitamos reconstruir fundamentalmente la organización social del cuidado, revalorizando el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres, organizando una redistribución justa del trabajo de cuidado entre países, géneros y generaciones, y proporcionando trabajo decente y “empleos verdes” para todos en la era digital. De manera crucial, el cuidado incluye la labor de cuidar el medio ambiente y los ecosistemas, de los que las mujeres y los pueblos indígenas son a menudo más dependientes y, en muchos contextos, los guardianes clave, lo que les sitúa en confrontación directa con la economía capitalista y en primera línea de las crisis climática y humanitaria.¹⁴⁴

Reconstruir la organización social de los cuidados supondrá salir de una economía neocolonial, dependiente de los combustibles fósiles, altamente emisora y extractiva, plagada de crisis humanitarias. Permite profundas transformaciones en nuestros sistemas alimentarios, energéticos y económicos que reducirían radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, promoverían la agroecología y garantizarían la soberanía alimentaria, el acceso a la energía y unos medios de vida resilientes. Situar los cuidados en el centro de nuestra economía, política y sociedad también significaría el restablecimiento del contrato social entre las instituciones internacionales, los Estados y las personas, seguido de un aumento masivo de la inversión en servicios públicos como la salud, la educación, el cuidado de niños y ancianos, la alimentación, el transporte, el saneamiento, los servicios contra la violencia de género, la vivienda y los espacios públicos seguros y verdes.

Ahora es el momento de revisar y reclamar el papel redistributivo esencial de los Estados, apoyando a “la mayoría” e impidiendo que sigan siendo capturados para servir a los intereses de “unos pocos”. Para ello debe ser fundamental una **nueva concepción de los servicios públicos**: financiados públicamente, prestados públicamente, alineados con los derechos humanos, controlados democráticamente, universales y sensibles a las cuestiones de género.¹⁴⁵ Necesitamos alejarnos de las economías extractivas e insostenibles, basadas en el mito de los límites infinitos y el **crecimiento perpetuo**, y dependientes del invisible (en términos de PIB) trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que soportan mayoritariamente las mujeres. Tenemos la oportunidad de construir sociedades y economías más solidarias e igualitarias, economías que puedan cuidar verdaderamente de las personas y del planeta.

La inversión en servicios públicos y en la fuerza laboral del sector público está en el centro de toda visión progresista de una transición feminista y justa, de reconstruir (o avanzar) mejor.¹⁴⁶ Hay pruebas convincentes de que la inversión en servicios públicos contribuye activamente al crecimiento, así como al desarrollo, pero esta es una verdad que se ha ignorado en gran medida en las últimas décadas.¹⁴⁷

Justicia fiscal y tributaria feminista

Una alternativa clara al enfoque neoliberal dominante de los impuestos se articula en el reciente recurso de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, [Framing Feminist Taxation](#). Necesitamos reformas fiscales más ambiciosas que sustituyan los impuestos regresivos por alternativas progresivas, sensibles al género y respetuosas con los derechos. Esto implica recomendar y promover reformas fiscales progresivas, como impuestos sobre la riqueza y el exceso de ganancias de las grandes empresas, combatiendo de forma significativa la evasión y elusión fiscales y los flujos financieros ilícitos. También significa que es fundamental una infraestructura fiscal mundial justa, democrática, eficaz y orientada a los derechos, para garantizar que los países tengan el espacio político necesario para aplicar medidas fiscales progresivas, justas y transformadoras de género a nivel nacional. Para ello, es necesario que el club de los países ricos (la OCDE) deje de tener el poder de fijar las normas fiscales mundiales y que se establezca una [convención fiscal de las Naciones Unidas](#) que obligue a los países a cumplir unas normas equitativas y jurídicamente vinculantes sobre el impuesto de sociedades, la transparencia financiera y la justicia fiscal.

Cuando los gobiernos se enfrentan a una restricción del espacio fiscal, tienen una opción fundamental: recortar el gasto público o aumentar los ingresos nacionales. Por esta razón, las políticas fiscales progresivas y ambiciosas son una base fundamental para una política fiscal más justa. Pero está claro que se necesita más, por ejemplo, una acción audaz para hacer frente a las deudas injustas, incluidas las que son legado del colonialismo o de [dictaduras neocoloniales](#). Existe una clara necesidad de una acción internacional audaz para resolver la actual crisis de la deuda, ya que los mecanismos existentes se quedan cortos, y es necesario pasar del simple aplazamiento del

pago de los intereses de la deuda a la renegociación y cancelación de algunas deudas. Pero a largo plazo, **también es necesario un nuevo mecanismo independiente de resolución de la deuda para que los países endeudados no se vean obligados a recurrir al FMI como prestamista de última instancia.** En términos más generales, cualquier reforma de la política fiscal debe negociarse de forma transparente, con la participación de todas las partes interesadas (incluida la sociedad civil) a través del **diálogo social nacional**, y cualquier reforma de la política fiscal que se lleve a cabo debe evaluar sistemáticamente las posibles repercusiones sobre la desigualdad económica y de género, con el compromiso de rechazar aquellas que se prevea que tengan repercusiones sociales negativas.

Trabajo de cuidados no remunerado y servicios públicos

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado debe ser reconocido por su valor social y económico, reducido y redistribuido, a través de servicios públicos con perspectiva de género que puedan soportar la carga, u hombres que hagan más. El trabajo de cuidados remunerado y los cuidadores deben ser recompensados con igualdad salarial y un trabajo decente.

Casi todos los servicios públicos pueden servir para reducir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres, ya sea a través de la mejora del abastecimiento de agua y el saneamiento, que reduce las horas de caminata para recoger suministros, la mejora de la electricidad, que reduce el tiempo de recogida de combustible y de cocina, la mejora del transporte público, que permite a las mujeres desplazarse con seguridad, la mejora de la sanidad, que reduce el tiempo de cuidado de niños y ancianos enfermos, la mejora de la atención infantil y la educación temprana, que permite a las mujeres trabajar.

Existen sólidos argumentos en favor del empleo¹⁴⁸ para lograr progresivamente el acceso universal al cuidado de los niños y a otros servicios de atención a largo plazo, como el cuidado de los ancianos y de las personas con discapacidad, lo que podría crear casi 300 millones de puestos de trabajo de aquí a 2035. La OIT estima que el 78% de estos nuevos puestos de trabajo estarían ocupados por mujeres, y el 84% serían empleos formales.

El Manifiesto de los Cuidados: Reconstruir la organización social de los cuidados, elaborado en 2021, articula una clara conexión entre la acción para reparar la injusticia del trabajo de cuidados no remunerado y la acción **para reivindicar el carácter público de los servicios de cuidados**. Critica la actual organización social de los cuidados, basada en la explotación de las mujeres no remuneradas y mal pagadas, y aboga por restablecer el deber y la responsabilidad primordial del Estado de prestar servicios públicos de cuidados y desarrollar sistemas de cuidados que transformen las relaciones de género y la vida de las mujeres. Este manifiesto ve una conexión orgánica entre esto y el financiamiento de la capacidad del Estado para invertir a través de una tributación justa y progresiva y garantizando la igualdad internacional de derechos fiscales de los Estados nación.

A la luz de las múltiples crisis a las que se ha referido este informe, es evidente que existen razones económicas y sociales de peso para revisar radicalmente el papel de los servicios públicos en la construcción de una sociedad y una economía solidarias. A la luz de la crisis climática, lo aprendido con el COVID-19 y el aumento de la desigualdad, los gobiernos deberían reconstruir el contrato social nacional con unos servicios públicos de calidad y financiados de forma sostenible como elemento central. Esto significará dar marcha atrás en décadas de financiamiento insuficiente crónico y en el impulso ideológico a favor de la privatización y las asociaciones público-privadas. Los gobiernos tienen que recuperar la soberanía democrática y anteponer a sus ciudadanos, negándose a aceptar préstamos o subvenciones de cualquier fuente que contribuya a la privatización de los servicios públicos. Renovar la visión de unos servicios públicos que tengan en cuenta las cuestiones de género y que sean verdaderamente responsables ante la población a escala local y nacional contribuirá a construir sociedades más justas y solidarias. Una visión progresista del futuro de los servicios públicos se recoge en el Manifiesto Mundial por los Servicios Públicos: Nuestro Futuro es Público.

Instituciones internacionales (incluido el FMI)

A escala internacional, una transición feminista y justa, con una perspectiva no colonial, transformará las normas, los sistemas y las instituciones de gobernanza mundial para reequilibrar las relaciones de poder desiguales históricas y actuales entre el Norte y el Sur global. Una transición feminista y justa también fortalecerá el Estado, para proteger no solo a sus ciudadanos, sino a todos los migrantes, desplazados internos y refugiados, reviviendo la noción de bienes públicos y servicios públicos gratuitos de calidad. Es necesario reafirmar el papel central del Estado como

actor responsable y redistributivo.¹⁴⁹ Esto es difícil de lograr mientras las instituciones internacionales presionan en la dirección opuesta, por lo que, a menos que se logre una reforma mucho más fundamental, habrá una presión continua para la abolición del FMI, tal y como pidió la campaña 50 Years is Enough en 1994 y quienes reiteraron el mensaje de que 75 años son suficientes en 2019.

6.1: EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DEL IMPACTO DE LAS RESTRICCIONES SALARIALES DEL SECTOR PÚBLICO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, y en el pasado por muchas economistas feministas, ONU Mujeres y otros, las políticas económicas ciegas al género socavan los derechos y la igualdad de las mujeres. Por lo tanto, es fundamental que el FMI y los gobiernos lleven a cabo evaluaciones sistemáticas ex ante y ex post de los impactos de género del asesoramiento del FMI en materia de política económica y de las condicionalidades de los préstamos, incluso en relación con las limitaciones de la masa salarial del sector público. Deberían tener en cuenta lo siguiente:

- **Cómo las limitaciones de la masa salarial del sector público afectan a las mujeres de forma desproporcionada, ya que es más probable que las mujeres trabajen en el sector público y que tengan salarios más bajos y contratos precarios de corta duración.** Por ejemplo, las restricciones salariales impuestas en el sector público a lo largo de muchos años han hecho casi con toda seguridad que las mujeres que han accedido a la profesión docente no hayan sido contratadas como “profesoras funcionarias” (parte de la profesión permanente) y tengan más probabilidades de haber recibido contratos eventuales o de corta duración. Esto significa que tienen más probabilidades de ser despedidas cuando se imponen recortes.¹⁵⁰
- **Cómo afectan las restricciones de la masa salarial del sector público al trabajo digno disponible para las mujeres** (utilizando indicadores de la OIT),¹⁵¹ explorando la participación de las mujeres en el mercado laboral en general (que se supone que es una prioridad del FMI), y la participación de las mujeres en la vida pública, incluida la toma de decisiones políticas desde el nivel comunitario al nacional.
- **Cómo la restricción del sector público y el apoyo al privado repercute negativamente en la diferencia salarial entre hombres y mujeres.** Puede ser imperfecta en el sector público, pero es mucho peor en el privado (véase el cuadro 1). El Banco Mundial comenta: *“Esta mayor igualdad salarial para las mujeres refleja probablemente el margen más limitado para la discriminación salarial en el sector público, dado que los salarios del sector público suelen estar muy regulados”*.¹⁵²
- **Cómo la reducción del sector público y el apoyo a la privatización y el cobro de tarifas afectan el acceso de las mujeres y las niñas a unos servicios públicos de calidad y con perspectiva de género, en comparación con los hombres y los niños.** Hay evidencia contundente de que, cuando hay que pagar para acceder a la sanidad o la educación, las mujeres y las niñas son las primeras excluidas.¹⁵³
- **Cómo la limitación de los servicios públicos conduce a un aumento de la ya injusta carga de los cuidados no remunerados** y del trabajo doméstico que soportan las mujeres debido a su papel socialmente asignado como cuidadoras.

Además, el FMI, los gobiernos y los ministerios de finanzas podrían y deberían **documentar el impacto de sus políticas** en los ODS. Lo ideal sería que examinaran todos los objetivos y sus metas e indicadores asociados, pero especialmente el ODS 1 (sobre la pobreza), el ODS 3 (sobre la salud), el ODS 4 (sobre la educación), el ODS 5 (sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer), el ODS 8 (sobre el trabajo decente), el ODS 10 (sobre la desigualdad) y el ODS 13 (sobre la acción por el clima). El impacto de la congelación de la masa salarial en el avance hacia estos objetivos debe ser proyectado (por adelantado) y analizado (en retrospectiva). Plantearse sistemáticamente la cuestión sería un punto de partida, y a la luz de la nueva Estrategia de Género del FMI, el consenso mundial para dar prioridad a los ODS y la obligación de promover los derechos humanos de las mujeres, debería ser necesario responder sistemáticamente a esta pregunta.



Cuando las escuelas cerraron debido a Covid, **Duongdav**, de 14 años, en Camboya, no tenía una conexión lo suficientemente buena para el aprendizaje en línea, por lo que asumió una gran carga de trabajo de cuidados no remunerado en su casa y su comunidad.

CRÉDITO: ACTIONAID

RECOMENDACIONES PARA EL FMI Y LOS MINISTERIOS DE FINANZAS EN MATERIA DE GÉNERO

Puede que el FMI no esté preparado para perseguir una visión holísticamente diferente que cuestionaría algunos de sus fundamentos y contradiría la actual dinámica de poder distorsionada que enmarca a la institución, pero aún hay cosas que podrían hacerse para que una estrategia de integración de la perspectiva de género fuera más creíble, y estas recomendaciones también serían relevantes para los ministerios de finanzas.

- Comprometerse más sistemáticamente con el pensamiento heterodoxo y las economistas feministas.
- Mirar más allá del PIB como medida de desarrollo, lo que incluye situar el cuidado y el bienestar en el centro de las estrategias de desarrollo y las políticas económicas, y hacer más por abordar honestamente las contradicciones entre austeridad y cuidados.
- Como mínimo, podrían comprometerse a garantizar que no perjudican a las mujeres ni socavan la igualdad de género con ninguna de sus intervenciones.

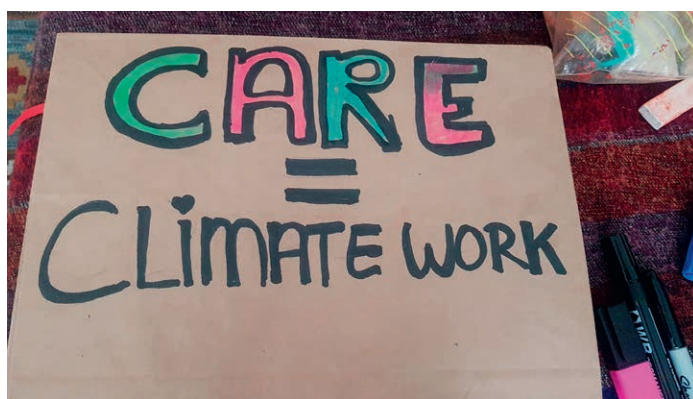
Las acciones compensatorias, como destinar la protección social a algunas mujeres después de que las políticas de austeridad hayan causado daños, no son suficientes cuando el FMI y los ministerios de finanzas tienen el poder de evitar que se produzcan los daños en primer lugar.

Basándonos en el análisis de este informe, nos unimos a los movimientos feministas y a las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer para rechazar la actual Estrategia de Género del FMI. No obstante, seguimos teniendo algunas recomendaciones clave sobre lo que el FMI y los ministerios de finanzas deberían hacer en materia de género, en consonancia con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos (véanse los recuadros 4.8 y 4.9):

- **Comprometerse a no hacer daño como mínimo absoluto y reconocer los daños causados por el asesoramiento político estándar y las condicionalidades de los préstamos a los países para que apliquen medidas de consolidación fiscal**, austeridad e impuestos regresivos.
- **Evaluar críticamente el impacto de género y desigualdad de sus políticas básicas**, mediante la realización sistemática de evaluaciones de impacto de género y desigualdad ex ante y ex post de toda su supervisión, programas y asesoramiento político.
- **Recomendar una combinación alternativa de políticas** cuando se detecten o prevean repercusiones negativas sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género, incluido el apoyo a alternativas económicas feministas.
- **Consultas constantes con diversos grupos de la sociedad civil**, especialmente organizaciones nacionales y regionales de defensa de los derechos de la mujer, economistas feministas y movimientos del Sur global.
- **Explorar todas las vías posibles para mejorar la progresividad fiscal y la sensibilidad de género**, incluida la presión constante a favor de una mayor tributación de la riqueza, las empresas multilaterales y los ingresos de los más ricos de la sociedad.
- **Reconocer el impacto negativo de las restricciones de la masa salarial pública** en la prestación de servicios públicos y en la participación de la mujer en el mercado laboral, y comprometerse a apoyar a los países para que aumenten el porcentaje del PIB destinado a la masa salarial allí donde los servicios esenciales tengan dificultades por la escasez de personal.
- **Apoyar la prestación universal y pública de protección social**, en lugar de regímenes estrictamente selectivos.
- **Evaluación del impacto** de las asociaciones público-privadas en la **desigualdad económica y de género**.
- **Considerar el impacto de las reformas del mercado laboral en los derechos de los trabajadores** según las normas internacionales del trabajo, la desigualdad económica, los ingresos, la participación laboral, la no discriminación y el empleo.
- **Alejarse de los subsidios a la industria de los combustibles fósiles**, tanto directa como indirectamente (por ejemplo, a través del sesgo optimista del FMI en las previsiones de crecimiento vinculadas al desarrollo de los combustibles fósiles), y apoyar procesos de transición hacia energías limpias que protejan el empleo.



CRÉDITO: ROOS SALBRINK



CRÉDITO: ROOS SALBRINK

6.2: OTROS RECURSOS

- [The Public Versus Austerity: Why public sector wage bill constraints must end](#), Oct 2021, David Archer and Roos Saalbrink, ActionAid International
- [Who Cares for the Future: finance gender responsive public services!](#), April 2020, Soren Ambrose and David Archer, ActionAid International
- ["Black girl resists": fighting for decent work](#), April 2021, Megha Kashyap, ActionAid UK
- [Guiding principles and minimum standards on unpaid care and domestic work](#), 2020, ActionAid
- [Framework: Gender-responsive public services](#), July 2018, ActionAid
- [Linking the local to the global: How the International Monetary Fund impacts public services and young women's rights and what to do about it: six steps for creating change](#). Feb 2021, Asha Herten-Crabb & Rachel Noble, ActionAid UK
- [Another World is Possible: Advancing feminist economic alternatives to secure rights, justice and autonomy for women and a fair, green, gender equal world](#). Nov 2020, Rachel Noble, Rachel Walker, Lila Caballero and Asha Herten, ActionAid UK
- [The IMF and Gender Equality: A Compendium of Feminist Macroeconomic Critiques](#), Oct 2017, Bretton Woods Project
- [Keeping the IMF accountable to women's rights and gender equality at the national level](#), November 2019, Bretton Woods Project
- [Gender-Just Macroeconomics; Engaging the IMF and World Bank](#), October 2016, Bretton Woods Project
- [Gender Equality & Macroeconomics project resources](#), coordinated by the Bretton Woods Project and carried out in partnership with the [Gender and Development Network](#), [International Women's Rights Action Watch Asia Pacific](#) and the [Latin American Network for Economic and Social Justice](#).
- [Feminist Taxation Framework, with examples from Uganda](#), March 2021, Global Alliance for Tax Justice (GATJ), Womankind Worldwide and Akina Mama wa Afrika
- [Gendered austerity and embodied debt in Ecuador: channels through which women absorb and resist the shocks of public budget cuts](#), 2022, Bhumika Muchhala & Andrea Guillem in *Gender & Development* (paywall)
- [Care Manifesto: Rebuilding the social organisation of care](#), March 2022, Public Services International
- [Centring care in Covid-19 economic recovery: a five-point care package](#), March 2022, Jessica Woodroffe, Gender and Development Network
- [The impact of economic reforms and austerity measures on women's human rights](#), April 2019, The Center for Women's Global Leadership
- [Guiding Principles on Human Rights Impact Assessment of Economic Reforms](#), March 2019, United Nations
- [Adding Fuel to Fire: How IMF demands for austerity will drive up inequality worldwide](#), Aug 2021, Oxfam International
- [The gendered impact of IMF policies in MENA: The case of Egypt, Jordan and Tunisia](#), October 2019, Nabil Abdo, Oxfam International
- [The Social Organisation of Care: A Global Snapshot of the Main Challenges and Potential Alternatives for a Feminist Trade Union Agenda](#), October 2021, Corina Rodríguez Enríquez and Cecilia Fraga, Public Services International
- [End Austerity: A Global Report on Budget Cuts and Harmful Social Reforms in 2022-25](#), Sept 2022, By Isabel Ortiz, Matthew Cummings
- [Recovery at a Crossroads: How countries spent Covid-19 funds in the Global South](#), Sept 2022, Financial Transparency Coalition

Referencias

1. Kate Donald y Nicholas Lusiani (2017) El FMI, la igualdad de género y la política de gasto. CDES. <https://www.brettonwoodsproject.org/2017/09/imf-gender-equality-expenditure-policy/>
2. Natalie Raaber y Diana Aguiar (2011) Feminist critiques, policy alternatives and calls for systemic change to an economy in crisis, Association for Women's Rights in Development. https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=IAFFE2011&paper_id=262
3. Para más detalles sobre la estructura de gobierno del FMI, véase: <https://www.imf.org/external/about/govstruct.htm>
4. Isabel Ortiz y Matthew Cummins (2022) End Austerity: A Global Report on Budget Cuts and Harmful Social Reforms in 2022-25, Initiative for Policy Dialogue/Justicia Social Global.
5. Global Alliance for Tax Justice (2021) Framing Feminist Taxation, con ejemplos de Uganda. <https://www.womankind.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/Framing-Feminist-Taxation-VF-two-page.pdf>
6. FMI (2022) IMF Strategy Toward Mainstreaming Gender. <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2022/07/28/IMF-Strategy-Toward-Mainstreaming-Gender-521344>
7. Véase, por ejemplo, la evidencia en esta declaración de AWID y FEMNET para la CSW63 2020 <https://www.awid.org/news-and-analysis/social-protection-must-remain-universal-right>. El siguiente documento de referencia para la CSW 2019 sobre género y protección social (y otras formas de inversión pública) Chopra, D. 2019 (de próxima publicación). *Initiating women's empowerment, achieving gender equality: interlinkages amongst social protection, infrastructure and public services*. ONU Mujeres también cuenta con un sólido corpus de investigación en este ámbito (véase <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/unwomen-policybrief01-makingnationalsocialprotectionfloorsworkforwomen-en.pdf?la=en&vs=4038>).
8. Segmento de alto nivel de ECOSOC, 13 de julio de 2022. <https://media.un.org/en/asset/k16/k1647tu3uk>
9. Raaber y Aguiar (2011).
10. Ibid.
11. Daniel Munevar (2021) A Debt Pandemic: Dynamics and implications of the debt crisis of 2020, Eurodad. <https://d3n8a8pro7vnm.cloudfront.net/eurodad/pages/2112/attachments/original/1622627378/debt-pandemic-FINAL.pdf?1622627378>
12. Global Alliance for Tax Justice (2021) The "deal of the rich" will not benefit developing countries. https://docs.google.com/document/d/1wh1eGXxwseVNIEdP5hToA_ZnLBB-ifUexW4i4g_zN3Y/edit
13. LATINDADD (2021) CSO launches call for the fair channelling of Special Drawing Rights. <https://www.latindadd.org/2021/09/29/osc-launches-call-for-the-fair-channeling-of-special-drawing-rights-osc-lanza-llamado-para-la-canalizacion-justa-de-los-derechos-especiales-de-giro/>
14. ActionAid (2020) Impacts of the Covid-19 on young women: A rapid assessment of 14 urban areas in India, Kenya, Ghana and South Africa. <https://actionaid.org/sites/default/files/publications/YUW%20final%20report.pdf>
15. Estructura de gobierno del FMI <https://www.imf.org/external/about/govstruct.htm>
16. Proyecto Bretton Woods (2018) IMF surveillance <https://www.brettonwoodsproject.org/2018/12/imf-surveillance-an-overview/>
17. Ortiz y Cummins (2022).
18. Frances Ryan (2022) Why is Starmer peddling the Tory 'magic money tree' line on public spending? It's just bad economics, The Guardian. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/05/magic-money-tree-tory-line-labour-keir-starmer-tax>
19. Jessica Woodroffe y Polly Meeks (2019) Opinion: Austerity takes a devastating toll on women. Here's why, DEVEX. Opinion: Austerity takes a devastating toll on women. Here's why. | Devex
20. Roosje Saalbrink (2019) Working towards a just feminist economy, Womankind Worldwide. <https://www.womankind.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/working-towards-a-just-feminist-economy-final-web.pdf>
21. OIT (2018) Care work and care jobs for the future of decent work. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
22. OMS (2020) State of the World's Nursing. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331673/9789240003293-eng.pdf>
23. Donald y Lusiani (2017).
24. Global Alliance for Tax Justice (2021).
25. Ibid.
26. FMI (2022) IMF Strategy Toward Mainstreaming Gender.
27. Se ha producido una disminución progresiva de la parte global de los ingresos que corresponde al trabajo (en comparación con los propietarios de capital) documentada por la OIT <https://ilostat.ilo.org/topics/labour-income/>. Véase also: ILO Department of Statistics (2019) The Global Labour Income Share And Distribution Data Production and Analysis Unit, Key Findings https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_712232/lang--en/index.htm
28. Véase AWID (2020) Bailout Manifiesto: From a Feminist Bailout to a Global Feminist Economic Recovery <https://www.awid.org/publications/bailout-manifiesto-feminist-bailout-global-feminist-economic-recovery> | and Bhumika Muchhala (2020) A feminist and decolonial global green new deal: principles, paradigms and systemic transformation, WEDO. https://wedo.org/wp-content/uploads/2021/06/FemEconClimate-ActionNexus_Brief_FemGND-1.pdf
29. La ISP lanzará la nueva guía: Rebuilding the Social Organisation of Care, Advocacy Guide, en octubre de 2022.
30. La OIT define el trabajo de cuidados no remunerado como "el trabajo no remunerado realizado para mantener el bienestar, la salud y la manutención de otras personas en un hogar o en la comunidad". El informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas elaborado por Sepúlveda en 2013 utilizó una definición de trabajo de cuidados no remunerado que incluye "el trabajo doméstico (preparación de comidas, limpieza, lavado de ropa, recogida de agua y combustible) y el cuidado directo de personas (incluidos niños, personas mayores y personas con discapacidad, así como adultos sanos) realizado en hogares y comunidades". ONU Mujeres, Redistribute Paid Work Departamento de las Naciones Unidas para el Desarrollo Internacional (2015) Imbalances on Paid Work. PNUD (2015) Informe sobre desarrollo humano 2015.
31. Elson, D. (1995) Gender awareness in modeling structural adjustment, World Developments 23(11): 1851-1868 citado en Muchhala & Guillem (2022) Gendered austerity and embodied debt in Ecuador: channels through which women absorb and resist the shocks of public budget cuts, Gender & Development, 30:1-2, 283-309. <https://www.tandfonline.com/eprint/UyF7N6DSG8S5R5XWZNR/full>
32. Ghosh, J. (2016) Time poverty and the poverty of economics, METU Studies in Development, 43: 1-19. citado en Muchhala & Guillem (2022).
33. Muchhala & Guillem (2022).
34. Jaffe, S. (2020) Social Reproduction and the Pandemic, with Titithi Bhattacharya. Citado en ActionAid, 2020, Another World is Possible: Advancing feminist economic alternatives to secure rights, justice and autonomy for women and a fair, green, gender equal world. https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/actionaid_feminist_economic_alternatives_vol_1.pdf
35. Elson, D. (2010) 'Gender and the global economic crisis in developing countries: a framework for analysis', Gender and Development 18(2): 201-212. Citado en Muchhala & Guillem (2022).
36. Folbre, N. (2009) Greed, Lust and Gender: A History of Economic Ideas, Oxford University Press. Folbre, N. (2021) The Rise and Decline of Patriarchal Systems: An Intersectional Political Economy, Verso. citado en Muchhala & Guillem (2022).

37. Donald y Lusiani (2017).
38. Roosje Saalbrink (2019).
39. Action Policy Brief (2017): Incorporation of Women's Economic Empowerment and Unpaid Care Work into Regional policies in Africa. Citado en Ambrose y Archer (2020) Who Cares for the Future? ActionAid International. <https://actionaid.org/sites/default/files/publications/final%20who%20cares%20report.pdf>
40. PSI (2022) Care Manifesto: Rebuilding the social organisation of care. <https://publicservices.international/resources/campaigns/care-manifesto-rebuilding-the-social-organization-of-care?id=11655&lang=en>
41. Natalie Raaber y Diana Aguiar Association for Women's Rights in Development (AWID) (2011) Feminist critiques, policy alternatives and calls for systemic change to an economy in crisis https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=IAFFE2011&paper_id=262
42. Global Development Policy Center y UNCTAD (2019) A new multilateralism for Shared Prosperity. https://www.bu.edu/gdp/files/2019/04/A-New-Multilateralism-GDPC_UNCTAD.pdf
43. If only the economic world had listened to 23 year old Phyllis Deane in the 1940s: <https://theconversation.com/womensunpaid-work-must-be-included-in-gdp-calculations-lessons-fromhistory-98110>
44. El movimiento ecofeminista ya lo defendía a principios de los noventa, por ejemplo Vandana Shiva y Maria Mies en 'Econfeminsim' - véase Another World is Possible. Para algunas referencias véase ActionAid_feminist_economic_alternatives_vol_1. pdf.
45. Dabla-Norris, E. et al (2015) Causes and Consequences of income inequality: a global perspective, IMF Staff Discussion Note. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf> Rachel Moussié (2016) Challenging corporate power: Struggles for women's rights, economic and gender justice, AWID. https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/ccp_fullreport_eng.pdf Raaber and Aguiar (2011) Feminist critiques, policy alternatives and calls for systemic change to an economy in crisis, AWID. https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=IAFFE2011&paper_id=262
46. Donald y Lusiani (2017)
47. Esto equivale a 2.000 millones de personas trabajando a tiempo completo (es decir, 40 horas semanales) sin remuneración. La OIT calcula que, a escala mundial, la inversión en servicios universales de atención infantil y cuidados de larga duración podría generar hasta 280 millones de empleos de aquí a 2030 y otros 19 millones de aquí a 2035, es decir, un total de 299 millones de puestos de trabajo.
48. Ibid.
49. Ortiz y Cummins (2022).
50. A pesar de las evidencias que demuestran que las APP no funcionan. Véase Eurodad (2020) Why public-private partnerships are still not delivering. https://d3n8a8pro7vnm.cloudfront.net/eurodad/pages/1912/attachments/original/1607952619/PPPs_EN.pdf?1607952619
51. Bhumika Muchhala (2020) COVID-19 reveals everything: The intertwined health and economic crisis calls for urgent responses, systemic reform and ideological rethink of the international financial architecture. Third World Network. <https://twm.my/title2/resurgence/2020/343-344/cover02.htm>
52. Donald y Lusiani (2017).
53. Bhumika Muchhala (2020).
54. Véase Kentikelenis y Stubbs (2016) [PDF] IMF conditionality and development policy space, 1985-2014 | Semantic Scholar
55. Oxfam International (2021) Adding Fuel to Fire: How IMF demands for austerity will drive up inequality worldwide. <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621210/bp-covid-loans-imf-austerity-110821-enpdf;jsessionid=4896CA0966A03430AB38C5ADFA5AD059?sequence=1>
56. Bhumika & Guillem (2021) figura 2.
57. Munevar, D. (2021) A Debt Pandemic: Dynamics and Implications of the Debt Crisis of 2020, Eurodad Briefing Paper. A debt pandemic: Dynamics and implications of the debt crisis of 2020 - Eurodad
58. Este grupo de países incluye Angola, Benín, República Centroafricana, Costa de Marfil, Camerún, República Democrática del Congo, República del Congo, Comoras, Cabo Verde, Eritrea, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Kenia, Malí, Mozambique, Mauritania, Senegal, Chad, Togo, Uganda y Zambia. Munevar, D. 2021.
59. Nita Bhalla (2022) Women sacrifice their health to shield families from spiking costs. <https://news.trust.org/item/20220922123627-51s40/>
60. Donald y Lusiani (2017).
61. Ibid.
62. Ibid.
63. Antonopoulos, Rania & Taun Toay (2009) From Unpaid to Paid Care Work - The Macroeconomic Implications of HIV and AIDS on Women's Time-tax Burdens, Economics Working Paper Archive, The Levy Economics Institute.
64. Elson, D. (2004) The Millennium Development Goals: A feminist development economics perspective, The Hague: Institute of Social Studies. <http://www.gwsafrica.org/knowledge/elsen.html>
65. Financial Transparency (2021) Towards a People's Recovery Tracking Fiscal and Social Protection Responses to Covid-19 in the Global South. <https://financialtransparency.org/wp-content/uploads/2021/04/FTC-Tracker-Report-FINAL.pdf>
66. Nabil Abdo (2019) The gendered impact of IMF policies in MENA: The case of Egypt, Jordan and Tunisia, Oxfam International. <https://www.oxfam.org/en/research/gendered-impact-imf-policies-mena>
67. Ostry et al. (2016): Neoliberalism : Oversold ? Neoliberalism: Oversold? -- Finance & Development, junio 2016 (imf.org) véase también Spilimbergo et al. (2008), Fiscal Policy for the Crisis. Also Furceri et al. (2021). Will COVID-19 Have Long-Lasting Effects on Inequality? Evidence from Past Pandemics
68. Ostry et al. (2016)
69. Ostry et al. (2016).
70. Ball et al. (2013). The distributional effects of fiscal austerity | Biblioteca multimedia - Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
71. TJNA (2011) 'Tax us if you Can - Why Africa should stand up for tax justice' ofrece algunas razones de peso a favor de la tributación progresiva "Los ingresos fiscales son necesarios para que cualquier Estado pueda satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. En África, los ingresos fiscales serán esenciales para establecer Estados independientes de ciudadanos libres, menos dependientes de la ayuda exterior y de los caprichos del capital externo". https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/tuiyc_africa_final.pdf
72. Baungsgaard, T. y Symansky, S. (2009) Automatic Fiscal Stabilizers: How Can They Be Enhanced Without Increasing the Size of Government? IMF Staff Position Note. <https://www.imf.org/en/Publications/IMF-Staff-Position-Notes/Issues/2016/12/31/Automatic-Fiscal-Stabilizers-23303>
73. Fabrizio et al. (2020). IMF, 2020, Women in the Labor Force: The Role of Fiscal Policies <https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2020/02/11/Women-in-the-Labor-Force-The-Role-of-Fiscal-Policies-46237>
74. Ibid.
75. Véase la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín (unescwa.org)
76. Isabel Ortiz y Matthew Cummins Initiative for Policy Dialogue (IPD) / Justicia Social Global (GSJ) (2022) End Austerity: A Global Report on Budget Cuts and Harmful Social Reforms in 2022-25.
77. Proyecto Bretton Woods (2016) The IMF and Gender: A critical analysis. <https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/06/final-gender-briefing-1-for-online-version-7.pdf>

78. Turkan Mukhtarova, Faisal A. Baig y Zahid Hasnain (2021) Five facts on gender equity in the public sector. <https://blogs.worldbank.org/governance/five-facts-gender-equity-public-sector#:~:text=Women%20in%20the%20public%20sector,in%20the%20formal%20private%20sector>
79. OMS (2020) State of the World's Nursing. Véase también: <https://www.who.int/activities/value-gender-and-equity-in-the-global-health-workforce#:~:text=Women%20account%20for%2070%25%20of,around%205%20billion%20people%20worldwide>.
80. ActionAid Internacional (2021) The Public Versus Austerity: Why public sector wage bill constraints must end. <https://actionaid.org/publications/2021/public-versus-austerity-why-public-sector-wage-bill-constraints-must-end>.
81. Es importante señalar que también existen muchas críticas al enfoque instrumentalista del FMI sobre la participación de la mujer en la población activa. Véase, por ejemplo, Fabrizio et al. (2020).
82. OECD (2017) Employment: Female share of Public and total employment. <https://www.oecd.org/g20/summits/osaka/G20-Women-at-Work.pdf>
83. ONU Mujer (2015) Transforming Economies, Realizing Rights: Progress of the World's Women 2015-6, Capítulo 4 <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/4/progress-of-the-worlds-women-2015>
84. Fulton, L. (2011) Widening the gender gap: the impact of public sector pay and job cuts on the employment and working conditions of women in four countries, Informe para la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, elaborado por el Labour Research Department. Rubery, J. (2015) Austerity, the Public Sector and the Threat to Gender Equality, Economic and Social Review.
85. El 51% del personal docente es permanente. Actualmente hay 100.000 profesores permanentes en Nepal.
86. Tomado de la encuesta de población activa de Nepal
87. El 94% de los trabajadores de Nepal en el desarrollo de la primera infancia son mujeres.
88. Hasta hace muy poco, era de 8.000 Rupias Nepalesas. Actualmente hay una propuesta para aumentar a 15.000 Rupias Nepalesas (unos míseros 130 dólares), de las que aproximadamente la mitad correrían a cargo del Gobierno Federal y el resto de los gobiernos locales. Pero el gobierno federal sigue ofreciendo solo 800 rupias.
89. De: ActionAid Nepal (2021) Research on Trends on Public Sector Teacher's Wage Bills.
90. ActionAid Internacional (2021) The Public Versus Austerity.
91. Antes de 2014, el costo de una cesta para una familia típica de cinco miembros se utilizaba como medida del umbral de pobreza alimentaria. Sin embargo, desde 2014, ZIMSTAT da el umbral de pobreza alimentaria por persona. Pero utilizamos la comparación de los ingresos medios mensuales de los trabajadores de los sectores de la educación y la sanidad, así como el umbral medio de pobreza alimentaria para una familia tipo de cinco miembros durante el periodo de 2010 a 2020.
92. ActionAid Zimbabwe (2022) Public Service Wage Bill Research Report. The Public vs Austerity. <https://zimbabwe.actionaid.org/publications/2022/public-service-wage-bill-pswb-research-report-public-vs-austerity-zimbabwe>
93. Ibid.
94. UNICEF fue uno de los primeros y más firmes defensores de la necesidad de proteger a los trabajadores de la salud y la educación, como se argumenta en este documento de trabajo de UNICEF (2010): Documento de trabajo sobre políticas y prácticas. "Protecting Salaries of Frontline Teachers and Health Workers": https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1745486
95. De: ActionAid Ghana (2021) Trends in Public Sector Wage Bill (Education and Health) and the Forces Behind Wage Freezes.
96. Donald y Lusiani (2017).
97. Ortiz, I., Cummins, M., Capaldo, J., Karunanethy, K. (2015) The Decade of Adjustment: A Review of Austerity Trends 2010-2020 in 187 Countries, SS Working Paper No. 53, ILO, The South Centre, Columbia University. https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2015/11/The-decade-of-adjustment_EN.pdf
98. C. Mariotti, N. Galasso y N. Daar (2017). Great Expectations: Is the IMF Turning Words into Action on Inequality? Oxfam. <https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/great-expectations-is-the-impf-turning-words-into-action-on-inequality-62034999>.
99. Abdo (2019).
100. FMI (2014) Tunisia: First and Second Review Under the Stand-By Arrangement, FMI como se menciona en Abdo (2019).
101. Donald y Lusiani (2017).
102. Abdo (2019).
103. S. Chant y K. Brickell (2014). Domesticating (and de-patriarchalizing) the development agenda: a need for greater household (and family) engagement in gender-related policy interventions? En: S.M. Rai y G. Waylen, eds. New Frontiers in Feminist Political Economy. N. Kabeer et al. (2013). Paid work, women's empowerment and inclusive growth: Transforming the structures of constraint, UN Women. Como se menciona en Abdo (2019).
104. Donald y Lusiani (2017).
105. En general, hay menos datos sobre el acceso a la protección social en el Sur global, pero la fase 1 del rastreador de la recuperación de los pueblos hizo algún trabajo sobre esto en el contexto de la recuperación FTC-Tracker-Report-FINAL.pdf (financialtransparency.org).
106. Financial Transparency Coalition (2021) Tracking Fiscal and Social Protection Responses to Covid-19 in the Global South. <https://financialtransparency.org/wp-content/uploads/2021/04/FTC-Tracker-Report-FINAL.pdf>
107. Véase ActionAid (2021) The Public Versus Austerity.
108. FMI (2016). Sierra Leone: 2016 Article IV Consultation and Fifth Review Under the Extended Credit Facility and Financing Assurances Review and Request for an Extension of the Extended Credit Facility- Comunicado de prensa; Informe de los servicios de la Comisión; y Declaración del Director Ejecutivo para Sierra Leona. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Sierra-Leone-2016-Article-IV-Consultation-and-Fifth-Review-Under-the-Extended-Credito-44098>
109. El salario promedio de las mujeres es el 86% del salario masculino en el sector público, frente al 76% del salario masculino en el sector privado formal. Banco Mundial (2019) Five facts about gender equality in the public sector <https://blogs.worldbank.org/governance/five-facts-about-gender-equality-public-sector>
110. Donald y Lusiani (2017).
111. Ibid
112. Donald y Lusiani (2017).
113. ActionAid Ghana (2019) Gender Responsive Public Services and Macro-Economic Policy in Ghana. <https://actionaid.org/publications/2019/gender-responsive-public-services-and-macro-economic-policy-ghana>
114. CESR (2015) Spain Factsheet http://www.cesr.org/sites/default/files/FACTSHEET_Spain_2015_web.pdf
115. ActionAid Internacional (2020). <https://actionaid.org/sites/default/files/publications/final%20who%20cares%20report.pdf>
116. Bhumika & Guillem (2022).
117. ActionAid Bangladesh (2017) The Recognition and Redistribution of Unpaid Care Work.
118. Donald y Lusiani (2017).
119. Ibid. y ONU Mujer, 2015 Transforming Economies, Realizing Rights: Progress of the World's Women 2015-6, Capítulo 4 <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/4/progress-of-the-worlds-women-2015>

120. Ibid.
121. Ibid.
122. OIT (2018) Care work and care jobs for the future of decent work. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
123. Muchhala & Guillem (2022). Picchio, A. (2003) A macroeconomic approach to an extended standard of living', in A. Picchio (ed.) Unpaid Work and the Economy. A Gender Analysis of the Standards of Living.
124. Muchhala & Guillem (2022). Budlender, D. y R. Meena (2012) 'Unpaid and overstretched: coping with HIV & AIDS in Tanzania' in S. Razavi and S. Staab (eds.) Global Variations in the Political and Social Economy of Care: Worlds Apart.
125. Donald y Lusiani (2017).
126. UN guiding principles on human rights impact assessment of economic reforms <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/guiding-principles-human-rights-impact-assessments-economic-reform-policies> <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/443/52/PDF/G1844352.pdf?OpenElement>
127. Citado en Proyecto Bretton Woods, 2019, The IMF and Gender Equality: Operationalising Change. <https://www.brettonwoodsproject.org/2019/02/the-imf-and-gender-equality-operationalising-change-2/>
128. Ibid.
129. La macrocriticidad es una norma bastante vaga que el FMI adoptó en 2012 para indicar lo que entra en el ámbito de su mandato, por ejemplo evaluando "qué cuestiones afectan a la economía a nivel macro" y orientar el compromiso del FMI en estas cuestiones. Véase FMI, Guidance Note for Surveillance under Article IV Consultation, 2015, citado en Bretton Woods Project, 2019, The IMF and Gender Equality: Operationalising Change <https://www.brettonwoodsproject.org/2019/02/the-imf-and-gender-equality-operationalising-change-2/>. The IMF's 'mandate restricts its field of work to matters that are either 'macro-critical' – those that have influence over national, regional or international aggregate indicators such as GDP and unemployment rates – or that may be influenced by using macro-economic tools, such as the adjustment of trade or fiscal policy.' In Bretton Woods Project, 2016, The IMF and Gender: A critical analysis <https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/06/final-gender-briefing-1-for-online-version-7.pdf>
130. FMI (2022) Strategy towards Gender Mainstreaming <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2022/07/28/IMF-Strategy-Toward-Mainstreaming-Gender-521344>
131. Más información en Bretton Woods Project (2020) IMF and World Bank decision-making and governance. <https://www.brettonwoodsproject.org/2020/04/imf-and-world-bank-decision-making-and-governance-2/>
132. Naciones Unidas (1995) Declaración y Plataforma de Acción de Pekín. <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf>
133. Naciones Unidas (1979) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Nueva York. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
134. Naciones Unidas (1966) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
135. IRAW-Asia Pacific <https://cedaw.iwraw-ap.org/cedaw/cedaw-principles/cedaw-principles-overview/substantive-equality/> 'La verdadera igualdad va más allá de la igualdad formal (de jure) - mujeres y hombres deben ser iguales de hecho (de facto) como de derecho.'
136. Bhumika Muchhala (2020).
137. Sargon Nissan y Roos Saalbrink (2021) The IMF's Comprehensive Surveillance Review: A bungled attempt at meeting the moment. <https://www.brettonwoodsproject.org/2021/07/the-imfs-comprehensive-surveillance-review-a-bungled-attempt-at-meeting-the-moment/>
138. El crecimiento del PIB en muchos países orientados a la exportación (por ejemplo, Bangladesh o Vietnam) depende en gran medida de la explotación y la "ventaja competitiva" que obtienen gracias a la mano de obra "barata" de las mujeres.
139. Véase Proyecto Bretton Woods. <https://www.brettonwoodsproject.org/gender-equality-macroeconomics-project/> and <https://www.brettonwoodsproject.org/2018/03/metoo-arrives-world-bank-publishes-gender-based-violence-action-plan/>
140. Proyecto Bretton Woods (2022) World Bank's new gender strategy: Concerns about approach to social protection and gender-blind macroeconomic reforms remain. <https://www.brettonwoodsproject.org/2022/07/hints-at-care-and-social-protection-focus-for-next-world-bank-gender-strategy-while-civil-society-hopes-for-macroeconomic-shift/>
141. La Nota del FMI de 2018 sobre la operacionalización del género en la recomendación de trabajo del país que: "Los equipos de país también deben pensar en el impacto de otras políticas macroeconómicas sobre el género. Por ejemplo, los recortes presupuestarios en subsidios y programas sociales, los **recortes en la masa salarial del sector público** o el aumento de las tarifas de transporte podrían tener un mayor impacto en las mujeres. En estos casos, el personal puede considerar una combinación alternativa de políticas para evitar esas externalidades negativas o, si lo primero no es factible, sugerir algunas medidas paliativas". Fondo Monetario Internacional (FMI), How to Operationalize Gender Issues in Country Work, 2018. <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/13/pp060118howto-note-on-gender>
142. Ortiz y Cummins (2022).
143. Revisión de 69 documentos del Artículo IV y de préstamos del FMI entre 2016 y 2021 en 15 países durante los últimos cinco años, buscando todas las referencias y conexiones con las facturas salariales del sector público en Ghana, Malawi, Senegal, Sierra Leona, Tanzania, Uganda, Zambia, Nepal, Vietnam, Brasil, Liberia, Sudáfrica, Kenia, Mozambique y Bangladesh). Encontrará una nota metodológica más completa al respecto aquí: <https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Methodology%20for%20Public%20versus%20Austerity%20final.pdf>
144. Véase: Global Witness, 29 de septiembre de 2022, A deadly decade for land and environmental activists - with a killing every two days <https://www.globalwitness.org/en/press-releases/deadly-decade-land-and-environmental-activists-killing-every-two-days/>; Women human rights defenders - OHCHR and women's human rights and gender equality <https://www.ohchr.org/en/women/women-human-rights-defenders>; IUCN (2020) Women Environmental Human Rights Defenders: Facing gender-based violence in defence of land, natural resources and human rights. <https://genderandenvironment.org/women-environmental-human-rights-defenders-facing-gender-based-violence-in-defense-of-land-natural-resources-and-human-rights/>
145. El enfoque de ActionAid sobre los servicios públicos sensibles al género se articula aquí: <https://actionaid.org/publications/2018/framework-2018-gender-responsive-public-services>
146. Véase por ejemplo, Building Back Better: A call for Courage, October 2020. Stream #1: Building Back Better with Courage to Collaborate Globally by FES Geneva | Listen online for free on SoundCloud
147. Véase, por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel sobre Salud, Empleo y Crecimiento Económico. Centro Internacional de Impuestos y Desarrollo (ICTD) (2017) How Can Governments of Low Income Countries Collect More Tax Revenue? <https://www.ictd.ac/publication/how-can-governments-of-low-income-countries-collect-more-tax-revenue/>
148. Este documento utiliza el término "caso de empleo" para alejarse de un enfoque instrumentalista del cuidado y el género, como el término "caso de inversión".
149. La tributación feminista es una vía clave para hacer realidad este Estado redistributivo. Véase Global Alliance for Tax Justice, Womankind and Akina Mama wa Afrika (2021).
150. Stromquist, N. (2018) Global Status of Teachers and the Teaching Profession, Education International. http://ei-ie-al.org/sites/default/files/docs/2018_ei_research_statusofteachers_eng_final.pdf

151. Véanse los Indicadores de Trabajo Decente elaborados por la OIT https://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--en/index.htm
152. Los salarios medios de las mujeres equivalen al 86% de los salarios masculinos en el sector público, frente al 76% de los salarios masculinos en el sector privado formal. Banco Mundial (2019) Cinco datos sobre igualdad de género en el sector público <https://blogs.worldbank.org/governance/five-factsabout-gender-equality-public-sector>
153. Véase, por ejemplo, PSI on Privatisation and Women's Human Rights. https://world-psi.org/uncsw/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/FactSheetCSW63_Privatisation.pdf

ActionAid es un movimiento mundial de personas que trabajan juntas para lograr más derechos humanos para todos y acabar con la pobreza. Creemos que las personas en situación de pobreza tienen en su interior el poder de crear un cambio para sí mismas, sus familias y sus comunidades. ActionAid es un catalizador de ese cambio.

<http://actionforglobaljustice.actionaid.org>

Número de registro internacional: 27264198

Sitio web: www.actionaid.org

Teléfono: +27 11 731 4500

Fax: +27 11 880 8082

Correo electrónico: mailjhb@actionaid.org

Secretaría de ActionAid Internacional,
Postnet Suite 248, Private Bag X31, Saxonwold 2132,
Johannesburgo, Sudáfrica.

Octubre de 2022